



UNIVERSIDAD NACIONAL

PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO



“La vulneración del derecho de participación política de los beneficiados con el indulto razonado a través de los impedimentos de postulación a cargos de elección popular: caso Yehude Simon”

TESIS

**Presentada para optar el Grado Académico de
Maestro en Derecho con mención en
Constitucional y Gobernabilidad**

AUTOR:

Bach. Barturen Fernandez, Juan Carlos

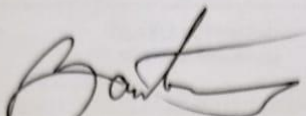
ASESOR:

Dr. Hernandez Rengifo, Freddy Widmar

LAMBAYEQUE – PERÚ

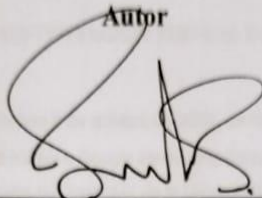
2022

**“La vulneración del derecho de participación política de los beneficiados
con el indulto razonado a través de los impedimentos de postulación a
cargos de elección popular: caso Yehude Simon”**



Bach. Juan Carlos Barturen Fernandez

Autor

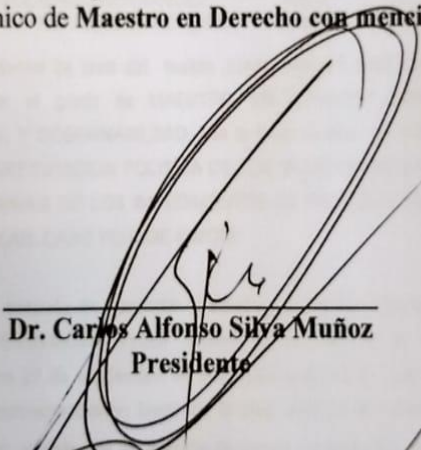


Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo

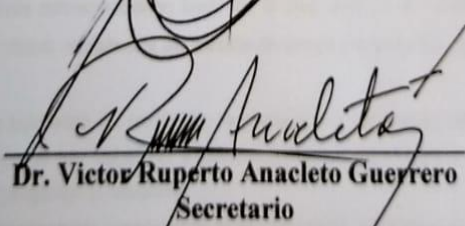
Asesor

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
para optar el Grado Académico de **Maestro en Derecho con mención en Constitucional
y Gobernabilidad**

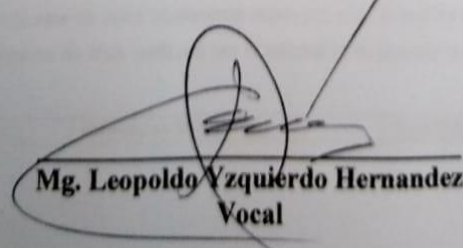
Aprobado por:



Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz
Presidente




Dr. Victor Ruperto Anacleto Guerrero
Secretario



Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernandez
Vocal

Lambayeque, 2022

Acta de sustentación

 UNPRG <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	ESCUELA DE POSGRADO <i>M. Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1 de 3	

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las **7p.m.** del miércoles 5 de octubre de 2022, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°236-2022 de fecha 10 de marzo de 2022, conformado por:

Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ	Presidente
Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO	Secretario
Mg. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ	Vocal
Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO	Asesor


Para evaluar el informe de tesis del tesista JUAN CARLOS BARTUREN FERNANDEZ candidato a optar el grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD, con la tesis titulada "LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS BENEFICIARIOS CON EL INDULTO RAZONADO A TRAVÉS DE LOS IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR: CASO YEHUDE SIMÓN".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°976-2022-EPG de fecha 23 de septiembre de 2022, que autoriza la Sustentación Virtual del Informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó al candidato a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole **30** minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición del candidato, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por el candidato, evaluando en base a la rúbrica de

Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

 UNPRG <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	ESCUELA DE POSGRADO <i>M.Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 2 de 3	

sustentación y determinando el resultado total de la tesis con **15** puntos, equivalente a

Regular quedando el candidato apto para optar el Grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCION EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD.

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

Siendo las **8.20** p.m. se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.



Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
PRESIDENTE



Dr. VÍCTOR RUPERTO ANACLETO GUERRERO
SECRETARIO



Mg. LEOPOLDO YZQUIERDO HERNÁNDEZ
VOCAL



Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO
ASESOR

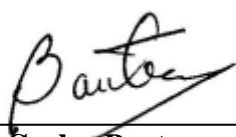


Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

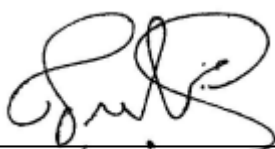
Declaración jurada de originalidad

Yo, **Bach. Juan Carlos Barturen Fernandez**; investigador principal, y **Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo**, asesor del trabajo de investigación: **“La vulneración del derecho de participación política de los beneficiados con el indulto razonado a traves de los impedimentos de postulación a cargos de elección popular: caso Yehude Simon”**, declaro bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, 05 de octubre de 2022.



Bach. Juan Carlos Barturen Fernandez
Autor



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

Dedicatoria

A mis padres, por quienes doy gracias a Dios al permitirme disfrutar cada momento de mi vida al lado de ellos; por permitirme tenerlos como ejemplo de excelencia.

Hoy concluye todo el esfuerzo y dedicación que demandó la realización de esta tesis, que será el inicio de mayores logros.

Agradecimiento

A mi asesor, a mis colegas de estudio, que aportaron con sus opiniones académicas para el mejor desarrollo de esta investigación.

Índice

Acta de sustentación	iii
Dedicatoria	vi
Agradecimiento	vii
Índice	viii
Resumen	xi
Abstract	xiii
Introducción.....	15
Capítulo I: Marco metodológico.....	18
1.1. Realidad problemática	18
1.2. Planteamiento del problema	20
1.3. Formulación del problema.....	22
1.4. Justificación e importancia del estudio	22
1.5. Objetivos	23
1.5.1. Objetivo general.....	23
1.5.2. Objetivos específicos	24
1.6. Hipótesis.....	24
1.7. Variables.....	25
1.8. Tipo de investigación.....	26
1.9. Antecedentes del problema.....	26
1.9.1. Internacional	26
1.9.2. Nacional.....	27
1.9.3. Regional.....	29
Capítulo II: Marco Teórico.....	31
Sub Capítulo I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS	31
1.1. La guerra interna y la trasgresión de derechos humanos	31
1.1.1. La Comisión Ad Hoc para la revisión de condenas y recomendación de Indultos y Gracias Presidenciales	35
Sub Capítulo II: TRANSGRESIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO A TRAVÉSDE LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA	38
2.1. Generalidades	38
2.1.1. La declaratoria de inconstitucionalidad de la Legislación Antiterrorista por el Tribunal Constitucional	42

Sub Capítulo III: DERECHOS FUNDAMENTALES SUSCEPTIBLES DE AFECTACIÓN	44
3.1. Dignidad como presupuesto para todos los derechos fundamentales	44
3.1.1. Derecho a la Igualdad	49
3.1.2. Derechos políticos en el estado peruano	53
3.1.2.1. Participación ciudadana y política	55
3.1.2.2. Diferencias entre la participación política de la participación ciudadana	57
3.1.2.3. Derecho de elección o sufragio	58
3.1.2.4. Democracia y derechos políticos	60
3.1.2.5. Derechos políticos	62
3.1.2.6. Derechos políticos en el derecho internacional	63
Sub Capítulo IV: LA VULNERACION DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLITICA EN ELCASO YEHUDE SIMON	66
4.1. Pleno jurisdiccional 340/2020: otros criterios que determinan la violación del derecho a la participación política	66
4.1.1. La Ley N° 30717 y su vulneración al derecho a laparticipación política	68
4.1.1.1. La emisión de la Ley N° 30717 y su relación con el caso de estudio	68
4.1.1.2. Criterios legales no considerados para la elaboración de la Ley N° 30717 y que causan la afectación del derecho a la participación políticade los beneficiarios del Indulto Razonado	70
4.1.2. Caso Yehude Simon	72
4.1.3. El Test de proporcionalidad	73
4.1.4. El principio de razonabilidad	76
4.1.5. El control difuso	80
Capítulo III: Análisis de datos y discusión de resultados	88
3.1. Tipo de investigación	88
3.2. Métodos y procedimientos para la recolección de datos	88
3.2.1. Métodos	88
3.3. Diseño de contrasación de hipótesis	88
3.4. Población y muestra de estudio	89
3.4.1. población	89
3.4.2. Muestra	89

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	90
3.5.1. Técnicas	90
3.5.2. Instrumentos	90
3.6. Presentación de datos	90
3.6.1. Procesamiento.....	91
3.7. Análisis estadísticos de los datos.	91
3.8. Resultados	92
3.9. Discusión de los resultados y contrastación de la hipótesis	99
Conclusiones.....	105
Recomendaciones	108
Referencias Bibliográficas.....	111
Anexos.....	122

Resumen

La presente investigación realiza un análisis de Ley N° 30717, que establece como impedimento para postular a cargos de elección popular tener sentencia por la comisión de delitos de terrorismo. La norma en cuestión no tomó en cuenta excluir el segmento poblacional que fue beneficiado con el del denominado “Indulto razonado” por error judicial. Es una investigación jurídica de tipo descriptiva - explicativa, teniendo como objetivo general **DEMOSTRAR** que los impedimentos para postular a cargos de elección popular añadidos en la legislación electoral – a través de la Ley N° 30717 - incurren en deficiencias que atentan contra el derecho a la participación política de los favorecidos con el indulto razonado; por ello la población y muestra de este estudio lo conforman magistrados conocedores de la materia y las resoluciones de primera y segunda instancia de los órganos electorales. El problema que se plantea en la investigación es ¿qué factores impiden o afectan el adecuado ejercicio del derecho a la participación política de los beneficiados con el indulto razonado por error judicial? Y como hipótesis señalamos que se vulnera el derecho a la participación política en la medida que los impedimentos para postular a cargos de elección popular añadidos a la legislación electoral – a través de la Ley N° 30717 – no contemplan como excepción de aplicación a los beneficiados con el indulto razonado en mérito al error judicial. Como resultados de la investigación, se llegó a la conclusión que los impedimentos para postular a cargos de elección popular añadidos en la legislación electoral a través de la Ley N° 30717 – en específico, la prohibición para aquellos que fueron sentenciados por delitos de terrorismo – al no señalar la excepción de aplicación para aquellos condenados por error judicial e indultados por intervención de la “Comisión Lanssiers” afectan el Derecho a la Dignidad (al violar de manera consiente los valores de participación democrática asumidos por el postulante y sus expectativas de realización política), el Derecho a la Igualdad (al ser impedido de postular en base a un

estigma social antes que por criterios técnico jurídicos, lo cual se manifestó en su desigual condición para postular por la demora que existió para tomar una decisión sobre la viabilidad de su candidatura) y el Derecho a la Participación Política, en su manifestación del Derecho a ser elegido para el ejercicio de cargos públicos.

Palabras Clave: Derecho a la Participación Política – Indulto Razonado

Abstract

This investigation conducts analysis of Law No. 30717, which establishes as an impediment to applying to popular election charges to have a sentence for the commission of terrorism offences. The rule in question did not take into account excluding the population segment that benefited from that of the so-called "Reasoned Pardon" by judicial error. It is a descriptive - explanatory legal investigation, with the general objective of demonstrating that the impediments to applying for positions of popular election added in electoral law – through Law No. 30717 – incur deficiencies that violate the right to political participation of those favored with reasoned pardon; that is why the population and sample of this study are judges who are aware of the subject matter and the first and second instance resolutions of the electoral management bodies. The problem in the investigation is what factors prevent or affect the proper exercise of the right to political participation of those benefiting from the pardon reasoned by judicial error? And as a hypothesis we note that the right to political participation is violated to the extent that the impediments to applying to positions of popular election added to electoral law – through Law No. 30717 – do not provide as an exception for the application to those benefiting from the pardon reasoned in merit to judicial error. As the results of the investigation, it was concluded that impediments to running for popular election positions added to electoral law through Law No. 30717

– specific, the prohibition for those who were convicted of terrorism offences – by not pointing out the exception of application for those convicted of judicial error and pardoned for the intervention of the "Lanssiers Commission" affect the right to dignity (by conscripting to the values of democratic participation assumed by the applicant and his expectations of political realization), the Right to Equality (being prevented from applying in

gon the basis of social stigma without legal technical criteria, which manifested it self in it sun equal condition for applying for the delay that existed to make a decision on the viability of his candidacy) and the Right to Political Participation , in its manifestation of the Right to be elected to the exercise of public office.

Keywords: Right to Political Participation – Reasoned Pardon

Introducción

La realización que busca toda persona constituye el fin del Estado. Ello implica, en un Estado Constitucional, reconocer derechos a los ciudadanos y limitar el ejercicio del poder estatal. Estos dos aspectos derivan en la creación de medios de protección adecuados que permitan promover y garantizar los derechos humanos; pero para esto es necesario establecer condiciones mínimas de estabilidad y desarrollo que aseguren el cumplimiento de aquellos mecanismos.

Esta idea no siempre es asumida como directriz de las políticas de Estado; mucho menos en contextos como el Conflicto Armado Interno que afrontó nuestro país, donde – además de la violación de distintos Derechos Humanos – destaca mencionar reiteradas trasgresiones ante el Derecho al Debido Proceso para procesar a personas involucradas o sospechosas de cometer delitos de terrorismo.

El obviar las más mínimas garantías procesales dio cabida a la condena arbitraria de gran cantidad de personas que, tiempo después, vería recuperada su libertad en base a las gestiones de la denominada Comisión Lanssiers. Sin embargo, la actual legislación sobre los requisitos para tentar cargos de representación popular, impuso como condición que los postulantes no tuvieran sentencias por terrorismo, sin hacer la excepción de aquellos beneficiados por el “indulto razonado” – como fue planteado en el pleno del congreso previo a la aprobación de la norma en cuestión-.

El caso de estudio es uno de los más emblemáticos de los últimos años en materia electoral (derecho a la participación política): el caso Yehude Simon. En su momento despertó suspicacias del por qué establecer nuevas limitaciones para postulaciones electorales por parte de un proceso eleccionario Regional y municipal; porque no excluía a las

personas beneficiarias de la Comisión Lanssiers; que aunque finalmente se permitió la participación del mencionado candidato, demostró que subsisten posibilidades de cometer arbitrariedad cuando no se aplican las normativas con criterios de razonabilidad. Otra justificación para la presente investigación es la posibilidad de estudiar las maneras de garantizar el derecho a la participación política durante los periodos electorales. Además, basándonos en el estudio de un caso en particular, se podría dar solución al mismo problema que se presentaría con el grupo de personas beneficiarias con el Indulto Razonado.

La justificación académica se materializa en el enriquecimiento doctrinario y analítico del Derecho Electoral a través de este trabajo, que busca – a través de la corroboración de la hipótesis planteada – dar mayores alcances sobre el principio del Estado Democrático de Derecho y el ejercicio de los derechos políticos surgidos de este.

Se ha tomado como directriz dos variables: INDEPENDIENTE, los Impedimentos para postular a cargos de elección popular añadidos en la legislación electoral a través de la ley N° 30717; y DEPENDIENTE la vulneración al derecho a la participación política.

La estructura de este estudio presentará en su capítulo I los aspectos metodológicos; tales como la realidad problemática, antecedentes del problema, justificación, planteamiento y formulación del problema, formulación de la hipótesis, objetivos de la investigación, las variables, materiales, métodos y la población y muestra.

En su capítulo II, plasmaremos lo referido al marco teórico, que implica una breve descripción situacional de lo suscitado durante el periodo de guerra interna, el surgimiento de la Comisión Ad Hoc para la revisión de condenas y recomendación de Indultos y Gracias Presidenciales, el debido proceso y sus trasgresiones a través de la legislación antiterrorista, los derechos fundamentales comprometidos en el caso de análisis, el

desarrollo internacional de los derecho políticos y sus instrumentos de protección.

Respecto al Capítulo III, se dará tratamiento a la Ley N° 30717 y su proceso de elaboración y emisión, la presentación de la candidatura del Señor Yehude Simon, la decisión de los órganos electorales respecto al caso en concreto y los criterios aplicados.

Finalmente, el capítulo IV mostrará el análisis y discusión de los resultados de la investigación, añadiéndose una crítica a los criterios utilizados para la resolución de este caso en primera instancia y complementándose con una profundización del votosingular de la resolución del pleno del máximo organismo en materia electoral.

Capítulo I: Marco metodológico

1.1. Realidad problemática

Durante el Conflicto Armado Interno (1980 – 2000) - periodo histórico donde se enfrentaron las fuerzas del Estado contra los grupos subversivos (PCP – SL y MRTA) – los distintos gobiernos que afrontaron el problema de la subversión aplicaron estrategias de combate que violaron derechos humanos en todos los planos, pero fue el Gobierno del Presidente Alberto Fujimori donde se profundizaron dichas afectaciones en el plano jurisdiccional, específicamente, en la trasgresión del derecho al Debido Proceso¹.

Para promover un proceso de pacificación y al darse cuenta de los errores que se cometían al aplicar este marco legal de lucha antsubversiva, el Presidente Fujimori emite la Ley N° 26655 que daba creación a la “Comisión encargada de proponer al Presidente de la República la concesión de indulto a personas condenadas por delitos de terrorismo o traición a la patria”, con la cual buscaban realizar la revisión de los procesados y sentenciados por terrorismo que purgaban prisión en razón de error judicial².

Los que resultaran beneficiados con este indulto razonado, quedaron exonerados del pago de la reparación civil impuesta en sus condenas, la eliminación de sus antecedentes penales y judiciales, y la restitución de sus derechos políticos.

Contrario a lo que señala la norma referida, el Congreso de la República, a

¹ Mediante un bloque de legislación antiterrorista, se emitieron durante el año 1992 siete (7) dispositivos legales que establecían, por ejemplo, el juzgamiento de civiles en fuero militar, la realización de juicios con “jueces sin rostro” y la reducción de los exceptos de responsabilidad penal de 18 a 15 años en el delito de terrorismo.

² De las 3225 solicitudes recibidas por la Comisión Ad Hoc, Alberto Fujimori excarceló a 535 personas, Valentín Paniagua a 227 y Alejandro Toledo a 131 (Páez, 2017).

iniciativa del congresista Héctor Becerril aprobó la Ley N° 30717 que, modificando la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales, estableció una restricción – requisito para que “Las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, (...); el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas”. (Ley N° 30717, 2018).

Si bien la modificatoria emitida tuvo por ideal “promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos”³, el planteamiento del texto legal afecta a los beneficiarios del denominado “indulto razonado” al vulnerarse su derecho a la participación política. Esto es así porque no se ha exceptuado de su aplicación a los favorecidos con este mecanismo de indulgencia, a pesar de las argumentaciones presentadas en el debate sobre esta ley⁴ a favor de que no se consignara bajo la misma condición delictiva a sujetos que, además de haber sido víctimas de un sistema punitivo deficiente, son nuevamente víctimas del estigma provocado por un error que ante la sociedad- ni siquiera habiendo sido subsanado – los sigue considerando terroristas.

Entre los derechos que permiten mantener el orden democrático y bienestar general, destacan aquellos pertenecientes a la Primera Generación (Civiles y Políticos) surgidos y reconocidos a raíz de procesos históricos como la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos. En específico, el ejercicio – en todas sus dimensiones - del derecho a la participación política puede regularse en determinados aspectos según lo permitido y establecido en el inciso segundo del artículo 23 del Pacto

³ Tenor de la Ley N° 30717.

⁴ “¿Qué sucederá con los cientos de peruanos que habían sido injustamente sentenciados por terrorismo y que el propio Estado ha reconocido su inocencia?” (De Belaúnde, 2018)

de San José de Costa Rica, pero nunca restringido, pues son la base de la convivencia social. He ahí la razón para asumir su defensa.

En el denominado Estado Constitucional contemporáneo, los derechos fundamentales - además de su naturaleza positiva prestacional⁵ y su eficacia horizontal⁶ - tienen una eficacia vertical, que se ve reflejada en la prohibición que tienen los detentores del poder estatal de trasgredir, menar o limitar el disfrute de los fundamentales derechos de las personas de forma arbitraria (PINO, 2018, p.40). Por ello, sostenemos que en el caso en concreto, el Estado Peruano no respetó esta dimensión de los derechos fundamentales.

1.2. Planteamiento del problema

Un eje central de las libertades políticas positivizadas en la Carta Magna es el denominado Derecho de Participación Política, instituido en la Constitución Política, en su articulado 31. Esto le permite a la sociedad “confirmar su Contrato Social” cada cierto período mediante el proceso electoral, donde se manifiestan de las varias dimensiones de la Participación Política: a) el derecho a elegir⁷ y b) derecho a ser elegido. Esta última dimensión requiere un análisis de mayor profundidad, ya que si su máxima manifestación se da durante los comicios electorales – y estos son entendidos como temporales y constitutivos de derechos a favor de las autoridades electas -, su vulneración conllevaría al riesgo de hacer imposible la corrección de la situación que afecta al derecho invocado por sustracción de la materia⁸.

⁵ Función estatal promotora o interventora.

⁶ Prohibición de trasgresión por parte de particulares.

⁷ Esta dimensión del Derecho de participación política se ve protegido mediante los denominados “Delitos contra la Voluntad popular” del Título XVII del Código Penal.

⁸ Cfr. Expediente N° 2366 – 2003 – AA/TC (Caso Juan Genaro Espino Espino), que fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional por esta causa, no obstante el haberse comprobado la vulneración a su derecho al debido proceso y a la participación política.

Para el caso concreto de estudio, se ha tomado la problemática manifestada en el Expediente ERM.2018009978 (Caso Yehude Simon). El día 13 de junio de 2018, el personero legal titular del partido Juntos por el Perú, se apersonó por su condición de tal ante el JEE-Chiclayo, solicitó la inscripción de la lista de candidatos de su organización a la gobernatura Regional de Lambayeque.

Posteriormente, el Abog. Yuri Diaz Jaime, en cumplimiento de responsabilidad como Secretario Jurisdiccional del JEECH hizo de conocimiento a los miembros de este tribunal electoral de primera instancia que el aspirante a la Gobernación Regional de Lambayeque no había consignado en su hoja de vida la sentencia por apología al terrorismo de 20 años que había recibido en el año 1992. Y que, en aplicación de la Ley N° 30717 que añadía el literal “f” al inciso 5 del artículo 14 de la Ley de Elecciones Regionales (materia de este estudio) era improcedente la inscripción de su candidatura. Finalmente, con Resolución N° 065-2018-JEE-CHYO/JNE, de fecha 16 de junio de 2018 y en base a los fundamentos expuestos, se notifica al personero legal de la improcedencia de su solicitud.

Apelando la decisión asumida por los magistrados del JEE de Chiclayo, se elevó la petición del personero del partido a la máxima instancia nacional en la materia de controversia. Así, resolviendo el recurso impugnatorio presentado por el personero titular el 19 de junio, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emitió la Res. N° 0446-2018-JNE donde declara procedente la candidatura de Yehude Simon – en mayoría de votos – por la no aplicación razonable de la normativa que establecía como impedimento de postulación el no tener sentencia por delitos de terrorismo. Sin embargo, en fundamento de voto, el magistrado Raúl Chanamé Orbe argumentó por vez primera la aplicación del Control Difuso en una instancia electoral.

Por cualquiera de las dos modalidades que fuese resuelto el caso, todo ello significa que, de darse un caso análogo, puede ser resuelto de manera distinta acorde a la interpretación que apliquen los operadores del derecho de las instancias resolutorias, ya que al no ser considerado un precedente vinculante no constituye obligatoriedad de aplicación de esos criterios.

Se puede ver también los inconvenientes que procederían de la aplicación del Control difuso para la solución de esta controversia: a) su naturaleza incidental solo permite que se aplique a un caso concreto, b) su alcance no excede los límites del expediente por lo que solo declara la inaplicabilidad de la norma masno la declaratoria de inconstitucionalidad y c) solo vincula a las partes intervinientes en la Litis, o sea que al no ser Erga Omnes, no es de observancia obligatoria para otros casos de similar o igual naturaleza.

De esta forma, se observa que los impedimentos establecidos en la Ley N° 30717, en sus términos exactos, encierra la potencial violación del derecho de participación política de aquellas personas que deseen ser candidatos y que hayan sido beneficiados por el indulto razonado en mérito a error judicial. Por ello, es necesario analizar la viabilidad de una propuesta de la modificación de esta Ley que resulta gravosa al derecho de participación política en perjuicio de este segmento poblacional.

1.3. Formulación del problema

¿Qué factores impiden o afectan el adecuado ejercicio del derecho a la participación política de los beneficiados con el indulto razonado por error judicial?

1.4. Justificación e importancia del estudio

El estudio planteado se justifica porque cumple una función social, pues intenta

llegar a las personas de los espacios ciudadanos que buscan ejercer mejor su derecho de participación política, máxime si están enmarcadas en el supuesto de excepción de aplicación por beneficio del indulto razonado. Complementario a ello, el análisis del presente caso permite crear doctrina jurídica electoral referida a la naturaleza del derecho de participación política y aperturar el debate sobre los límites impuestos por la Ley N° 30717, sea dentro del territorio nacional o para casos análogos surgidos a nivel mundial.

De igual manera, la investigación surge para que, a partir de la afectación al derecho de participación política del Señor Yehude Simon, puedan identificarse deficiencias e impresiones de la normativa electoral que necesitan ser corregidas, a fin de evitar restricciones arbitrarias a derechos fundamentales; máxime si los procesos electorales son de naturaleza temporal y sus etapas de desarrollo precluyen, y la presentación de recurso impugnatorio alguno no detiene la continuación del proceso.

Finalmente, es necesario precisar que existe un grado de vulnerabilidad de las personas beneficiadas con el indulto razonado que se verían excluidas de poder postularse a puestos de elección popular por la aplicación de los impedimentos establecidos en la Ley N° 30717; condición que es posible mejorar mediante una propuesta legislativa que busque exceptuar de su aplicación a aquellos afectados por la inconstitucional legislación antiterrorista y que recuperaron su libertad mediante procedimientos especiales (indulto razonado).

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

- **DEMOSTRAR** que los impedimentos para postular a cargos de elección

popular añadidos en la legislación electoral – a través de la Ley N° 30717 -
incurren en deficiencias que atentan contra el derecho a la participación política
de los favorecidos con el indulto razonado.

1.5.2. Objetivos específicos

- **ANALIZAR** la regulación de los impedimentos para postulación a cargos de elección popular establecidos en la legislación electoral a través de la Ley N° 30717.
- **DESCRIBIR** la forma en que se ve vulnerado el derecho de participación política de los favorecidos con el indulto razonado a raíz de las modificaciones establecidas por la Ley N° 30717.
- **PROPONER** la consignación del indulto razonado como excepción de aplicación de los impedimentos para postular a cargos de elección popular y de medios idóneos que permitan la protección del derecho a la participación política de los candidatos a cargos de elección popular.

1.6. Hipótesis

La presente investigación plantea la siguiente hipótesis positiva:

Se vulnera el derecho de participación política en la medida que los impedimentos para postular a cargos de elección popular añadidos a la legislación electoral – mediante la Ley N° 30717 – no contemplan como excepción de aplicación a los beneficiados con el indulto razonado en mérito al error judicial.

1.7. Variables

VARIABLES	INDICADORES	SUB INDICADORES	INDICE	TÉCNICAS
INDEPENDIENTE Impedimento para postular a cargos de elección popular añadido en la legislación electoral a través de la ley N° 30717	Impedimentos para postular a cargos de elección popular	Supuestos de Improcedencia de candidatura según Ley N° 30717	- Condena por delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, TERRORISMO; aun cuando hubiesen sido rehabilitados. - Indultados razonablemente por error judicial.	Análisis Documental
		Excepción de Aplicación		
DEPENDIENTE: Vulneración al derecho de participación política	Derecho de participación política	Derecho a Elegir	- Normativas de la materia (Constitución Política, Ley Orgánica de Elecciones Regionales y Municipales). - Ciudadanos habilitados para el voto en las elecciones regionales y municipales - Candidatos inscritos para las elecciones subnacionales. - Indultados impedidos de postular a cargos de representación popular por elección por la Ley N° 30717.	Análisis Documental
		Derecho a ser elegido		

1.8. Tipo de investigación

Por el tipo, esta investigación es Básica y Analítica; por el nivel de estudio es descriptiva - explicativa; y por el enfoque es Cualitativa.

1.9. Antecedentes del problema

Durante el desarrollo de la presente investigación, se han encontrado estudios relacionados a la problemática tratada que pueden ser tomados como referentes a un distinto nivel.

1.9.1. Internacional

El primer trabajo que podemos al que podemos referenciar es “*El control jurisdiccional del Indulto Particular*”⁹, donde se realizó un estudio sobre la figura del Indulto particular como una potestad del Rey de España. Se le cataloga como una institución jurídica residual del Absolutismo y subsidiaria, que no debe ser reemplazante del fuero jurisdiccional en cuanto a su efecto indulgente. Además, permite observar que a través de la historia ha tenido un uso político a fin de aperturar procesos de reconciliación nacional o suplir defectos del aparato punitivo del Estado.

En su décimo sexta conclusión afirmó que:

“Se entiende que la operatividad del denominado indulto supone un coste elevado al Estado encontrado su justificación exclusivamente cuando se constituye en un recurso y/o instrumento para materializar el máximo fin al que se adscribe, que es realizar justicia en un caso en el cual los magistrados de los

⁹ Tesis presentada por Jerónimo García San Martín, para la obtención del grado académico de Doctor en Derecho – Univ. Las Palmas de Gran Canaria - España. Año 2006.

tribunales se hayan visto impedidos o - en su defecto – la ley no ha previsto con suficiencia estándares de equidad en la situación del posible beneficiado. Por esto y con estas condiciones, esta gracia constituye una excepción al ius puniendi del Estado” (García, 2006, p. 150)

La importancia de este trabajo radica en el tratamiento integral de la institución legal del indulto y la citada conclusión, que respalda la posición planteada en este proyecto. Mediante esta premisa, el autor expresa que la finalidad máxima del Estado es la realización de la justicia. Pueden presentarse dos supuestos en que la aplicación del indulto puede lograr este objetivo: cuando se busca consolidar procesos de pacificación nacional, o corregir errores judiciales de un sistema punitivo con deficiencias. Es en este último supuesto en el que el autor enfatiza que de haber existido condiciones como insuficiencia probatoria, falta de motivación, etc. (derechos vinculados al debido proceso), se vuelve una condición exigible y justificada que las sentencias restrictivas del derecho a la libertad sean corregidas.

1.9.2. Nacional

En las indagaciones pertinentes, hemos hallado como referente nacional el trabajo denominado “*La inaplicación del Control Difuso de Convencionalidad por parte del JNE y los Derechos Políticos de los candidatos a cargos públicos*”¹⁰. Estudia al JNE y su competencia – bajo lo previsto en el artículo 138 de la Const. Peruana. – para aplicar el control difuso, a la luz de las normas internas como de la Convención Americana. La

¹⁰ Tesis presentada por Akemy Vargas Vereau, para la obtención del Título profesional de Abogada - Universidad Nacional de Trujillo - Trujillo. Año 2017.

inaplicación de este deber afecto en ese entonces a poco más de 15 candidatos en elecciones subnacionales. Consideramos que el trabajo citado refuerza el planteamiento de la afectación al derecho de participación política durante la resolución del caso Yehude Simon, donde los magistrados del JEE de Chiclayo incumplieron con la aplicación del control difuso (labor dejada al Jurado Nacional de Elecciones).

En su conclusión dos, la autora señaló que:

“Los derechos políticos son inherentes a la naturaleza humana ya que guardan relación con una existencia digna, al permitir que los ciudadanos participen en la organización política de un país [donde] vive[n] y se desarrolla[n] (...) así los candidatos a cargos públicos tienen el derecho a ser elegidos o también llamado derecho de sufragio pasivo el cual es un derecho fundamental que otorga al ciudadano la facultad de postular a cargos públicos y a someterse a la decisión electoral del pueblo, y el derecho a acceder a cargos públicos representativos o de elección popular que es el derecho que tiene todo ciudadano en la medida que es integrante del cuerpo electoral” (Vargas, 2017, p. 138)

En esta afirmación se busca confirmar el status de fundamental que ostenta el derecho de participación política, pues se desprende de la misma naturaleza social del hombre y su necesidad de interacción inter-personal que le permita decidir sobre la *res pública*. Es imposible concebir una sociedad políticamente organizada al margen de un Estado constitucional de Derecho que garantiza un sistema democrático para el ejercicio de las libertades y limita el ejercicio arbitrario del poder estatal.

En su conclusión tres, la autora señaló también:

“Son diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que reconoce y brindan protección internacional a los derechos políticos los cuales son de observancia obligatoria para los Estados que lo celebran, (...) mencionando los únicos supuestos en que se puede limitar el ejercicio de los derechos políticos los cuales son por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o por condena por juez competente en proceso penal”. (Vargas, 2017, p.139)

Esta proposición resalta la protección de la participación política como derecho en la legislación nacional, extranjera y la abundante jurisprudencia del TC. A través de la Convención Interamericana se ha dejado limitados los supuestos que restringen su ejercicio, y en ningún caso se vislumbra como limitante el haber sido indultado, y más aún si este ha sido otorgado en mérito a error judicial (incluso, el mismo dispositivo legal establece la indemnización a perjudicados por la mala praxis jurisdiccional).

1.9.3. Regional

Finalmente, hemos decidido tener como antecedente de investigación el trabajo denominado “*Cuestionamiento Judicial de las Resoluciones del JNE frente al Derecho de Acceso a la Justicia como manifestación del Derecho al Debido Proceso*”¹¹, donde se estudió los motivos por los cuales las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones pueden ser contradichas en el fuero ordinario judicial. Por ejemplo, por desconocimiento de las normativas adecuadas,

¹¹ Tesis presentada por Chirinos y Salazar, para la obtención del Título profesional de Abogado - Universidad Señor de Sipán – Píntel. Año 2008.

interpretación equívoca de los dispositivos legales o mal manejo de conceptos jurídicos que le darían precisión y motivación a sus resoluciones.

De esta forma, en su primera conclusión refirió que:

“El cuestionamiento de las resoluciones judiciales del JNE frente al Derecho de acceso a la Justicia como manifestación del Derecho al Debido Proceso encuentra cabida por la manifestación de incumplimientos, discordancias normativas y teóricas discrepancias, que estuvieron causalmente relacionados y encuentran su explicación en el hecho de que se desconocía o se inaplicó (o se aplicó de manera incorrecta) algún Planteamiento Teórico, especialmente sobre todo un concepto, teoría y principio básico, por no haberse aplicado correctamente el cuerpo legal de nuestro ordenamiento jurídico como la Carta Magna, normas supranacionales o por no haber recurrido oportunamente a la jurisprudencia” (Chirinos, 2008, p.223).

La actividad de los jueces, al ser discrecional, tiene un margen de error subjetivo donde influyen distintos factores como los mencionados anteriormente. Esto complementa nuestro estudio en tanto que el fallo del caso Yehude Simon emitido en la primera instancia del órgano rector en materia electoral no sustentó adecuadamente su decisión manifestó algunos errores que se detallarán en la sección respectiva del trabajo de investigación. Si la controversia no hubiera sido resuelta en la instancia superior, habría sido posible su cuestionamiento en ámbito jurisdiccional.

Capítulo II: Marco Teórico

Sub Capítulo I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1.1. La guerra interna y la trasgresión de derechos humanos

Las últimas décadas del siglo XX significaron para el Perú un período de violencia y confrontación política a nivel armado entre el Estado y los grupos subversivos¹². Las consecuencias fueron 69 mil personas muertas o desaparecidas y US\$ 21.000.000 millones de dólares como estimación económica de pérdidas (CVR, 2003, pp. 17, 391).

Es posible precisar distintos períodos¹³:

1. Comienzo de la violencia armada: Iniciado con el atentado en Chuschi, Cangallo, el 17 de mayo de 1980 perpetrado por el PCP-SL culminando con la orden presidencial del 29 de diciembre de 1982 que autorizó la entrada de las fuerzas armadas en el combate antiterrorista en la región Ayacuchana.
2. Militarización del conflicto: Iniciada con el establecimiento del Comando Político-Militar Ayacuchano en enero de 1983, hasta la masacre en los penales suscitado en junio de 1986.
3. Expansión de la violencia: Etapa abarcada entre la revuelta carcelaria de los penales hasta el ataque senderista al puesto policial de Uchiza en el departamento de San Martín.

¹² Las condiciones que permitieron el desarrollo del conflicto fueron brechas históricas entre Lima y provincias (El centralismo de los recursos y las oportunidades), entre Costa, Sierra y Selva (estas dos últimas regiones con escasa interconexión y ausencia de proyectos modernizadores) y entre criollos, mestizos, cholos e indios (la manifestación de discriminación de índole étnico-cultural y racial). (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, p. 337).

¹³ Comisión de la verdad y reconciliación- Informe Final- pp. 59-600.

4. Periodo de extrema crisis: violencia subversiva y contraataque estatal: Desde el ataque de Sendero Luminoso al puesto de Uchiza y culminado el 12 de setiembre de 1992 con la captura en Lima de Abimael Guzmán Reinoso realizada por el GEIN.
5. Reducción de la actividad subversiva, la corrupción y la dictadura autoritaria: Inició con la captura de Guzmán y concluyó con la huida del ingeniero Fujimori.

Mientras que el primer responsable de las pérdidas humanas y materiales reportadas fue el PCP - SL, el Estado se posicionó como el segundo responsable de dichas acciones.

Esto se explica a partir de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional¹⁴ aplicada por los distintos gobiernos que enfrentaron este problema, y por el nulo conocimiento y arraigo de las doctrinas de Derechos Humanos que iniciaban su transformación en normas cuya trasgresión comienza a ser castigada en tratados supranacionales añadidos en el corpus legis peruano (ob. cit.).

Uno de los aspectos donde fue más explícita la violación de los Derechos Humanos fue en el área jurisdiccional. Para el año 1992, invocando – en general – la situación económica y social en la que se encontraba el país y – en específico - la necesidad de combatir la subversión a través de mecanismos más “eficaces”, el Presidente Alberto Fujimori dio el golpe militar del 5 de abril.

Disuelto el organismo parlamentario, avizoró la opción de construir un marco jurídico antiterrorista que - sin considerar los mínimos márgenes de respeto al Debido proceso y los Derechos Humanos - comenzó a implementar.

¹⁴ Consistente en la política impulsada por los Estados Unidos – durante la Guerra Fría – para combatir a las ideologías o movimientos de orientación marxista. Se caracterizó por legitimar la toma del poder por parte de los institutos armados y la sistemática violación de los Derechos Humanos (Comblin, J., 1977. p. 75)

Así lo describió la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003):

“En cuestiones de normatividad antsubversiva — entorno jurídico para procesar y juzgar — se efectuaron cambios que no contemplaron las precauciones del debido proceso. De esta manera, el decreto ley 25475 estableció la cadena perpetua en parte de los supuestos de terrorismo y acrecentaba las condenas en otros, a la vez que imponía el mecanismo de jueces sin rostro. De manera similar, el decreto ley 25499 modificó el decreto legislativo 748, mediante el cual el estado instituyó la ley de arrepentimiento para terroristas rendidos. Igualmente, el decreto ley 25564 redujo la edad punible de dieciocho a quince años en aquellos que incurrieran en delitos terroristas. También el decreto ley 25659 amplió el delito de traición a la patria para actos punibles antes catalogados como terrorismo. Permitió de manera manifiestamente inconstitucional, que los fueros castrenses procesaran a civiles imputados como terroristas. Siguiendo la misma tendencia, se redujo los periodos procesales del proceso y limitó la defensa de los acusados. Con este bloque normativo se afianzaron las potestades militares, igualmente se aseguró el aumento de su poder en áreas rojas (de emergencia) y en la acción antiterrorista. Además, el decreto ley 25626 estableció que los establecimientos (...) tenían que adaptar sus procesos a las directrices del Comando Operativo del Frente Interno, encabezado por el comandante en Jefe del C.C. de las FF. AA. A la par, el decreto ley 25708 instituyó mecanismos para sancionar delitos de traición a la patria y la aplicación del sumario proceso del Código de Justicia Castrense en procesos desarrollados en escenarios operativos. Por último, el decreto ley 25728 otorgó potestades jurisdiccionales con las cuales se podía sentenciar en ausencia a los acusados del delito de terrorismo”. (p. 317).

Si nuestro sistema penal inquisitivo de por sí ostentaba deficiencias, la implementación de estos dispositivos legales trajo consigo el aumento del margen de

error en el juzgamiento de personas ligadas a apología, terrorismo, apología y traición a la patria. Tanto así que, según estimaciones de la Comisión Ad Hoc para el otorgamiento de Indultos, de cada diez personas sentenciadas por delitos ligados a acciones terroristas, tres fueron víctimas de procesos irregulares y eran inocentes encarcelados, hasta el mes de agosto del año 1996 (Ideele, 1999).

Esta reiterada violación de los DD.HH. en nuestro país surgida en base a aplicar las normas antiterroristas fue tal que ameritó su Informe situacional de los DD.HH. en el Perú de la CIDH donde se señaló que, por ejemplo:

“Se creo de novedosa manera un sistema paralelo de justicia, conocido también como "jueces sin rostro" direccionado a otorgar al Poder Judicial las mínimas garantías de integridad personal y seguridad que los jueces interventores necesitan para funcionar libremente de las represalias en las que podrían verse inmersos como víctimas los juzgadores del fuero ordinario. Este sistema, no obstante, fue criticado por los organismos de DD.HH. En ese sentido, se precisó que, al no saberse la identificación de estos magistrados, no sería posible dar garantías de independencia e imparcialidad, aspecto duramente objetado debido a las acciones asumidas por el Ejecutivo en relación con el Poder Judicial desde el golpe de abril de 1992”. (CIDH, 1993).

El Estado comenzó a darse cuenta de la cantidad de errores judiciales que se estaban cometiendo. Esto motivó a tomar dos acciones trascendentes que buscaron enmendar las posibles afectaciones: a) Modificó la Ley N° 25475, eliminando el sistema de los jueces “sin rostro” y b) Emitiendo la Ley N° 26655, que creaba la Comisión Ad Hoc para la revisión de los casos de sentenciados por terrorismo o traición a la Patria.

1.1.1. La Comisión Ad Hoc para la revisión de condenas y recomendación de Indultos y Gracias Presidenciales

1.1.1.1. Antecedentes de la comisión Ad Hoc

A raíz de la violencia terrorista en la que se encontraba nuestro país en el año 1992, el gobierno de ese entonces recurrió a una encarcelación de emergencia extrema, la cual tuvo un costo muy alto debido a que hubo muchos casos de injusta prisión; inocentes con detenciones y procesos por terrorismo. Como menciona (Peralta, 1992) que, “Un país enfrentado a una espiral de violencia, con la población atemorizada por el peligro de salir a la calle a riesgo de morir en un atentado, difícilmente encuentra la oportunidad para la autocritica”.

Nombraron al Sacerdote Hubert Lanssiers como representante del presidente Fujimori en la comisión Ad Hoc, así que el 15 de Agosto de 1996, se emite la Ley N° 26655, que daba origen a la denominada “Comisión Lanssiers”, que tuvo la misión de “proponer al Presidente de la República, previa calificación y evaluación y de manera excepcional, el otorgamiento del indulto para las personas que fueron condenadas por delitos relacionados al terrorismo o traición a la patria, fundamentado en medios de prueba no suficientes que creen la Comisión la certeza de presumir, en parámetros de lo razonable, que no habrían mantenido vinculación alguna con elementos, actividades u organizaciones terroristas” (Ley N° 26655, 1996).

Aquella ley establecía que los indultos serían propuestos al Presidente, y en los supuestos en que esta Comisión encontrara que en

los expedientes no existían pruebas para vincular a los solicitantes en los procesos u organizaciones terroristas, accederían al indulto.

Estuvo conformada por el representante de la Defensoría del Pueblo, Dr. Jorge Santisteban, el representante del Presidente, y el Ministro de Justicia. Se les asignó las siguientes facultades:

- Acceder a los expedientes obrantes en el fuero ordinario y el fuero militar de manera personal e indelegable.
- Acceder a entrevistarse con sentenciados o procesados por terrorismo, sus modalidades y la comisión de traición a la patria.
- Acceder a documentos públicos o privados, dentro de lo permitido por ley y en caso fueran inevitablemente necesarios.
- Requerir y entrevistarse con cualquier sujeto o funcionario cuya declaración considere concluyente en relación al supuesto tratado.

En un proceso de revisión que comenzó el año 1996 y que se extendió hasta el Gobierno de Alejandro Toledo, se dio libertad a un total de 993 personas, de un total de 3225 solicitudes recibidas.¹⁵

Durante el proceso de excarcelación de las personas inocentes, se observó que – además de cumplir con el principio de convencionalidad¹⁶ – era necesario resarcir el daño ocasionado por el error judicial. De esta manera, se amplía el marco jurídico de esta Ley

¹⁵ Se estimó que el total de tiempo de reclusión ahorrado a las personas beneficiarias con el indulto asciende a 4789 años, 7 meses y 20 días, lo cual no solo implicaba el ahorro de recursos para el Estado, sino que permitía ver la magnitud del problema que conlleva la irregularidad de los procesos penales hasta entonces desarrollados.

¹⁶ Por ejemplo, en lo que respecta al **Artículo 10. Derecho a Indemnización** (CADH, 1969).

mediante 2 dispositivos legales:

1.1.1.1.1. Ley N° 26994, que otorgó beneficios adicionales en los supuestos de Derecho de Gracia e Indulto brindados conforme a la Ley N° 26655, bajo el siguiente detalle: a) El término definitivo de los procesos penales donde la acusación sea por terrorismo o traición a la patria, b) Dejar nulos los antecedentes policiales, penales y judiciales, c) Exoneración de las multas que hayan sido impuestas como parte de las sentencias, d) Culminación de la inhabilitación de derecho civiles y políticos, e) Conclusión de los decomisos o medidas cautelares desarrolladas en el procedimiento de investigación policial o judicial y f) Retorno de los DNI a cada uno de los beneficiados.

1.1.1.1.2. Ley N° 27468, que exoneró de la Reparación Civil en los casos de indulto o derecho de gracia para los supuestos de terrorismo o traición a la Patria.

1.1.1.2. El Indulto

El indulto y Derecho de gracia fue bastante objetado por constituirse como arreglo a la problemática de los condenados injustamente pues se suprime la pena impuesta. El problema es que a pesar de ser reconocidos como inocentes, sus antecedentes penales de sus beneficiarios subsisten, siendo estos, motivo de discriminación al

momento de que aquellos indultados quieran encontrar trabajo. Los familiares y los propios procesados pudieron elegir entre ser indultados o esperar su proceso para la revisión de sus procesos:

“La duración de la investigación fue de un año y medio, durante el cual el equipo de la Comisión Ad Hoc, antes de determinar que el señor Yehude Simon Munaro fue condenado erróneamente por apología al terrorismo” (Castillo, 2019)

Teniendo entonces todos estos beneficios, es posible deducir de que no es razonable la restricción de facultad alguna en mérito a condena por error judicial. Sin embargo, sucedió todo lo contrario en primera instancia electoral en el caso Yehude Simon, quien fue uno de los beneficiarios con esta Ley.

Sub Capítulo II: TRANSGRESIONES DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA.

2.1. Generalidades

La Comisión de la Verdad y Reconciliación tuvo asignada labores que le permitían aclarar los procesos y dilucidar las responsabilidades respecto a la violencia subversiva y la violación de DD.HH. acontecidas de mayo de 1980 a noviembre de 2000, además impulsó un proyecto destinado a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos; realizar un análisis de las conductas de la sociedad y las instituciones estatales, que influyeron en el desencadenamiento de la violencia que atravesó el país; sugerir acciones de prevención, con el objetivo de que sean atendidas en iniciativas legislativas, políticas o administrativas.

Dichas funciones eran en teoría, pues en la realidad si bien dio recomendaciones que conllevaron a la elaboración del Acuerdo Nacional, no tuvo gran incidencia sobre los casos juzgados en el marco de la “legislación antiterrorista”, en base a la cual se juzgó inadecuadamente los actos de terrorismo, al no garantizarse un debido proceso judicial desde la acusación por este delito; no se investigó ni sancionó. No primó la Constitución ni los tratados al promulgar normas legales que iban contra los derechos fundamentales.

Estando establecido en el inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve, constituye un derecho continente, a través del cual toda persona tiene la potestad de que se observen obligatoriamente las distintas garantías que emanan del debido proceso “en todo tipo de procedimiento” (STC Exp. N° 7289-2011-AA/TC, fundamento 3).

Doctrinariamente, el maestro LINARES (1970) conceptualizó que:

“El Debido proceso constituye un standard que delimita - dentro del ámbito que dejan la ley suprema y las demás normas al organismo ejecutivo (administrativo y judicial) - lo válido de la actuación de esos órganos. En su vertiente adjetiva constituye un conjunto de reglas y procedimientos tradicionales que el ejecutor de la ley debe observar cuando regulan jurídicamente la conducta de los individuos” (p. 125)

Complementariamente, el T.C. en la sentencia contenida en el Exp. N° 07289-2005-AA/TC, f. j. 5, hace mención sobre el derecho al debido proceso aseverando que contiene conexo otros derechos fundamentales, pues este es una garantía para proteger otros derechos; es así pues que podemos afirmar que por el derecho al debido proceso, el señor Yehude Simon pudo llevar un juicio justo y mantener su dignidad y honra intachables; sin embargo al ser vulnerado, esto acarreó la vulneración extendida a otros derechos fundamentales.

Así pues, también en la STC en el Exp. N° 09727-2005-HC/TC, f. j. 7 y la STC Exp. N° 07022-2006-PA, f. j. 5, el Tribunal Constitucional reconoce el derecho al debido proceso, lo resuelve el juez conforme a un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Afirma que:

“Es importante señalar que el TC ha reconocido en este derecho unadimensión sustancial, de modo tal que el juez constitucional tiene legitimidad para evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones jurisdiccionales”. (Fundamento Jurídico 5).

La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales lo tienen todas las personas, sin embargo en esa época de violencia, las garantías constitucionales como el amparo y hábeas corpus no fueron eficaces frente a las detenciones arbitrarias, vulnerando el derecho al debido proceso.

Por su parte, Orbe (2017) nos dice que el debido proceso es una garantía que tienen las personas, afirmando que:

El debido proceso constituye mínimas protecciones que requiere cualquier sujeto para afrontar un proceso (derecho de defensa, pluralidad de instancia, presunción de inocencia, etc.), en tanto la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho de la persona a que el Estado brinde una idónea, imparcial y oportuna justicia para la resolución de sus demandas o pretensiones. (p. 215)

Este derecho y estas garantías fueron las más lesionadas en los procesos judiciales por terrorismo. La legislación implementada iba contra el derecho al debido proceso, afectando garantías procesales. Así mismo dio competencia a la justicia militar, excediendo de la facultad brindada, además de no ser parte de su labor. Y

como afirma Nieto (2012) “el fin del debido proceso es la aplicación y vigencia correcta del proceso judicial, por eso es concebida como una garantía de tutela reconocida en la Constitución, encontrándose regulada en el artículo 139, inciso 3, de la Carta de 1993.” (p. 205)

Además, en la Sentencia de la CIDH en el 2013, en su fundamento 209 menciona que “el actuar u omitir del estado a través de sus diversos órganos en un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, deberá respetar el debido proceso.” (p. 59)

Por su parte el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0015-2001-AI/TC- Fundamentos jurídicos N° 9 y 10, menciona que una tutela jurisdiccional efectiva comprende una correcta intervención del Estado en el proceso, respetando los derechos de las personas, rigiéndose bajo el principio del debido proceso judicial, así habrá una resolución judicial conforme a derecho. Por ello fue importante y necesario el indulto al señor Yehude Simon, pues se le vulneró derechos en su proceso penal, el cual tenía error judicial, afectándose también una correcta tutela jurisdiccional.

No solo nuestra normativa nacional sino también la legislación internacional, los tratados a los que estamos adscritos, protegen el derecho al debido proceso; este derecho insta a que se lleve un correcto proceso y/o juicio. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagró explícitamente:

“(…) el Decreto Ley N° 25475 fue creado a la par con demás normativas sobre la materia, a la persecución, juzgamiento y sanción de acusados de delitos terroristas, dando origen a un contexto sistemático de violación de DD.HH., pues santificó un modus procedimental que irrespetó las garantías al debido proceso de los sujetos que afrontaron penas con fundamento en aquellos dispositivos legales, y dio como

consecuencia que personas inocentes pasaran largos periodos de prisión” (CADH, 2000)

Teniendo presente la legislación nacional y este precedente internacional sobre el derecho al debido proceso, podemos afirmar que no solo al señor Yehude Simon se le ha venido vulnerando derechos fundamentales desde iniciados el proceso del que injustamente se le acusó y que ahora es motivo para seguirle vulnerando otros derechos fundamentales.

2.1.1. La declaratoria de inconstitucionalidad de la Legislación Antiterrorista por el Tribunal Constitucional

El ordenamiento jurídico de un país es en sí mismo una política del Estado, es decir, “una idea que se busca materializar”, en el cual contribuyen los legisladores, magistrados y gobernantes (Dyzenhaus, 2006, pp. 3-8).

Tal vez, fue este el sentido que asumió el Tribunal Constitucional al emitir su sentencia de inconstitucionalidad sobre la legislación antiterrorista, en el año 2003, a través del EXP. N.º 010-2002-AI/TC.

Un grave problema pendiente de resolver fue la elevada cantidad de juicios penales contra sospechosos de cometer delitos de terrorismo, que a su vez afrontaban sus procesos tanto en la vía ordinaria como en el fuero militar, o en un fuero que no correspondía a la jurisdicción, en el marco de la legislación de emergencia promulgada por el Gobierno de Alberto Fujimori, saltando todo estándar nacional e internacional de protección de los DDHH. Es aquí donde la urgencia de restituir los derechos de primera generación (civiles y políticos) de condenados por error judicial impulsó a la creación de la Comisión Ad-Hoc a

favor de los Inocentes que se encontraban encarcelados en prisión.

La inconstitucionalidad fue demandada por la Defensoría del Pueblo, la cual pudo ser resuelta con mejor criterio por el Tribunal Constitucional al ya no encontrarse inmersa en las intervenciones políticas de años anteriores. “Esta decisión jurídica dictaminó que el bloque de normatividad antsubversiva cuestionado era inconstitucional parcialmente y consagró un conjunto de parámetros de interpretación vinculativos, a fin de redireccionar dentro del enmarcamiento constitucional ciertos dispositivos legales” (Siles, 2015, p. 86)

Así, entre los principales contenidos de la sentencia figuran los siguientes:

- a) el establecimiento de hitos de interpretación a ser observados por los magistrados sobre la tipificación de los delitos contenidos en «terrorismo», a fin de aminorar sus imprecisiones y no chocar con el principio de legalidad;
- b) la declaración de inconstitucionalidad del delito de «traición a la patria» y del delito de «apología del terrorismo»; c) la declaración de ilegalidad de los juzgamientos realizados en el fuero militar” (Landa, 2006).

Para fundamentar su decisión, el Tribunal Constitucional acogió los distintos referentes jurisprudenciales establecidos por la CIDH en un conjunto de sentencias dictaminadas en contra del Estado peruano (en los fundamentos jurídicos 99, 100, 129, 155, 219), contra otros Estados (en el fundamento jurídico 172), así también como en opiniones consultivas (por ejemplo, el fundamento jurídico 181).

De esta forma, se suscitó un interesante proceso de enriquecimiento

interjurisdiccional en el ámbito de protección internacional de DD.HH. La sentencia del T.C. tomó la precaución de no generar perjuicios derivados de la aplicación inmediata de su decisión. Por ello, señaló un período de *vacatio sententiae*, por el cual quedaban suspendidos los efectos que generase, e incitó al Poder Legislativo a regular sobre las materias parte de cuestionamiento jurisdiccional, conforme a lo determinado en la sentencia, a manera de evitar el surgimiento de espacios vacíos y/o lagunas legales que facilitarían la afectación de la política criminal y carcelaria del Estado.

El Congreso, en lo que concernía a su competencia, “procedió a la delegación de facultades legislativas al Gobierno; dándose poco tiempo después un conjunto de decretos legislativos que reformaron la legislación antiterrorista y que fueron puestos en vigencia, dando lugar a la revisión de los juicios inconstitucionales y su acomodo a la Constitución y el D.I.D.H.” (Siles, 2015).

Así, como pocas veces en la historia de nuestra patria, se ejecutó un proceso simbiótico de apoyo y coordinación entre poderes, direccionado a la proposición del entorno jurídico de lucha antiterrorista considerando los derechos y la Carta Magna, y la rectificación de las acciones atentatorias de los fundamentales derechos de los procesados por cualquiera de las modalidades de terrorismo (ob. Cit).

Sub Capítulo III: DERECHOS FUNDAMENTALES SUSCEPTIBLES DE AFECTACIÓN

3.1. Dignidad como presupuesto para todos los derechos fundamentales

La dignidad del ser humano “es protegida por el D.I.D.H., que va tomando

formada desde mil novecientos cuarenta y cinco como una rama contenida en el Der. Inter., adentrando a las personas y sus facultades como parte importante de este nuevo ordenamiento supranacional, con reservas que hacen que sea una subjetividad “funcional y limitada” (Carrillo, 1995, p. 16).

La dignidad es la acción del Estado y de la sociedad. Aquella que debe ser protegida, defendida. Por su parte, Ballesteros (1996) afirma que “La dignidad es esencia del ser humano, es lo que hace que toda mujer y todo hombre, de cualquier edad, sea importante y valioso en sí mismo (...)” (p. 241).

En la STC recaída en el Exp. N° 02273-2005-PHC, f. j. 5, afirman que la dignidad no solo es valorada por ser justificada en la Constitución como principio importante de la persona, quien es el fin de Estado; sino que también se fundamenta con los otros fundamentales derechos manifestados en la Constitución.

A manera doctrinaria complementaria, Ballesteros (1996) nos precisa:

“Este principio valor de dignidad contiene dos tipos de elementos: subjetivos, que atañen a crear la certidumbre de que las condiciones personales de vida permiten lograr la felicidad; y objetivos, afines con las circunstancias de vida que tiene un sujeto, para obtenerla. De allí es que la dignidad deviene en derecho fundamental” (p. 258)

Kant (1785) en su tiempo afirmó que la dignidad es absoluta, innegociable, invaluable dinerariamente, ya que es una característica inherente de las personas con carácter de absoluto porque no da cabida a negociación alguno, siendo un atributo propio de los seres racionales que solo obedecen a las leyes que si mismo se da. De manera tal que la autonomía es el indudable fundamento de la naturaleza humana y esta le dota de dignidad al encontrarse con la razón (p. 25).

Laporta (2000) contemplaba al hombre como aquel que encaminaba su vida, definiéndola conforme a su libertad, “en suma, alguien que tiene libertad y potestad, en las cuales consiste su dignidad.” (pp. 18-19).

Se dice también que “la dignidad es la condición que corresponde al ser humano como portador de raciocinio y libertad, superior distinto a toda la demás creación, y que amerita un trato concordante en toda situación con su humana naturaleza” (Gonzales, 1986, p. 81).

Actualmente, la dignidad humana, aparece contextualizada intelectualmente en un entorno donde se ha logrado superar las taras históricas, posicionándose en una etapa donde se acogen elementos humanos y racionales que va junto a los sujetos y a sus sociedades. Según Peces – Barba (1984) cuando se reflexiona sobre la dignidad dentro del ámbito que toca a una ordenada sociedad, no se cuenta la realidad, más bien lo que debería ser la misma (p. 67).

Como es sabido, el paradigma constitucional gira en torno a la cláusula personalista del artículo primero del texto magno de 1993, conteniendo la naturaleza primordial y el papel de articular la dignidad de las personas, al reconocerlas como “fin supremo de la sociedad y del Estado” (que heredó esta connotación de su predecesora de 1979).

Entonces, podemos finalizar que el valor donde se funda el ordenamiento es la dignidad, y de ella se deriva todo el listado de fundamentales derechos que se reconoce a cada uno de los individuos que conforman nuestra estructura social. Es denominada como «Premisa antropológica del Estado constitucional» (Haberle, 2003, p. 169), a la par que Benda (2001) destaca su constitución como “valor jurídico” y “norma jurídico-positiva”, además de su expresión en cada uno de los fundamentales derechos que la

Carta Magna contiene, pues éstos son razones independientes derivadas de la dignidad. (pp. 120 – 122).

En nuestra Constitución la dignidad humana es un reglamento legítimo, una disposición que se debe respetar; además de determina qué y cómo una comunidad política reclama este derecho. La dignidad humana cuando se vincula con la persona y sus derechos fundamentales, se materializa. El T.C. peruano en la sentencia recaída en el EXP. N° 1397–2001–AA/TC, f- 1, menciona a la dignidad de las personas “como valor supremo, preside todo nuestro ordenamiento constitucional”.

Al hablar de dignidad humana no solo se hace referencia a un simple valor de cada persona, sino va más allá, pues se trata del máximo fin de la sociedad y un Estado de derecho, como también nuestra carta magna hace referencia en su artículo 1. Según Córdova (2006) “Cuando se habla o invoca la dignidad humana, qué duda cabe, se trata de poner de manifiesto no sólo un valor o principio, sino también un concreto derecho fundamental.” (p. 32)

Es un valor que contiene la persona humana, valor que reconoce nuestro texto constitucional. Por su parte Cama (2010) afirma que, “A partir de una aproximación a los ordenamientos constitucionales nacionales, constatamos que el reconocimiento del contenido axiológico de la dignidad permite organizar el poder político”. (p. 25)

La dignidad como ya se venido desarrollando, es valorada por nuestra Constitución, pues delimita los fines que el Estado debe cumplir en defensa de la persona. A lo expuesto, es evidente que con la legislación antiterrorista, este derecho ha sido vulnerado al señor Yehude Simon, no solo se vio afectado de su libertad cuando fue procesado injustamente en la época de terrorismo, sino que luego de muchos años su dignidad vuelve a ser vulnerada, desvirtuándolo como candidato a un

cargo público por la normatividad que prohíbe a los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual postulara cargos públicos.

La dignidad es propia de la persona, ya que esta es libre y con identidad a la misma persona. Al respecto, Sessarego (2005) menciona que:

“Los fundamentales derechos de los sujetos buscan la integral proyección del ser humano toda vez que es un ser con dignidad. Esta dignidad justifica y explica derechos fundamentales de la persona y les sirve de fundamento” (p. 46)

Por su parte Arroyo (2018) menciona que “También se puede entender la dignidad como el principio constitucional en virtud del cual el Estado debe estar al servicio de la defensa de la persona y de su más pleno desarrollo y bienestar (p. 17). En ese sentido evidenciamos que el Estado no ha cumplido con el respeto del derecho a la dignidad establecido en nuestra Constitución.

a) Dimensiones de la dignidad:

Afirma Arroyo (2018) que la dignidad tiene dos dimensiones:

“Una subjetiva, vinculada a la persona de manera individual, en tanto titular del derecho; y otra dimensión objetiva, pues la dignidad se constituye como un principio y un valor que informa la acción del Estado, así como el ordenamiento jurídico. En dicho sentido, como derecho de la persona —ámbito subjetivo deberemos tener en cuenta las específicas circunstancias en las que el derecho a la dignidad podría verse afectado, de modo tal que cuando se aprecie la instrumentalización de una persona en una situación concreta para el logro de fines ajenos a su propia voluntad, estaremos frente a la lesión de su dignidad.” (p. 18)

La dignidad es fundamento para los demás derechos fundamentales, debería haber un respeto irrestricto de este derecho, pues su vulneración afecta a más derechos constitucionales. (Arroyo, 2018) Dice que es “un elemento para la integración jurídica en caso de vacíos o deficiencias de la regulación legal y reglamentaria.” (p. 19)

Por su parte (Nieto, 2012) dice “La dignidad humana es el fundamento de los derechos, por eso siempre debe encabezar el título o capítulo dedicado a los derechos en una Constitución.” (p. 428)

De todo lo citado y argumentado, la dignidad del señor Yehude Simon fue vulnerada durante el proceso injusto, y si bien en un primer momento el Estado trató de enmendar la vulneración promulgando una ley que los indultaba a las personas afectadas por procesos judiciales irregulares; luego de muchos años se volvió a cometer un acto arbitrario contra su persona al impedírsele - ahora a través del impedimento para acceder a cargos de representación política y popular en base a un requisito prohibitivo promulgado poco antes de iniciar el proceso electoral regional - llevar a cabo una acción que dentro del ámbito de su esfera cognitiva personal, le hubiera permitido una mayor realización como persona.

3.1.1. Derecho a la Igualdad

Frente a la situación del señor Yehude Simon Munaro en su proceso electoral en el que no lo querían admitir su postulación, se atenta contra el derecho de la participación política y conexamente a la igualdad.

Como principio, la igualdad es regida con justicia para todos, sin discriminación en las participaciones. Por su parte, Bobbio (1991) dijo que es el principio valor “en el que se sintetiza la idea de la formal justicia en el sentido

acostumbrado de la palabra, dice simplemente que deben recibir un trato igualitario todos aquellos que pertenezcan a la misma categoría.” (p. 45)

El TC en su sentencia emitida en el Exp. N° 00009- 2007-PI, f. j. 20, sustentan que la toda persona tiene el mismo amparo ante la ley, sin recibir actos discriminatorios; si la Constitución y la norma electoral permite a las personas participar políticamente; si bien el señor Yehude Simon contaba con una sentencia, siendo una condición delictiva, esta pena fue perdonada a través de un indulto otorgado a varios procesados que tuvieron una sentencia con error judicial; lamentablemente ahora por esa condición no se le permitía participar en política para asumir un cargo público.

A su turno, Ballesteros (1996) menciona que, “la igualdad es uno de los derechos sociales de la persona. Pero su ubicación tradicional es ésta, la que la sitúa dentro del conjunto de los derechos individuales.” (p. 115)

Citando al mismo autor, nos explica que la igualdad la tienen todos los seres humanos como especie, teniendo la misma condición y calidad.

Al respecto, el maestro Arroyo (2018) menciona que todos somos igual con derechos y deberes, que ciertamente como otros juristas menciona, nuestras funciones y en sentido material somos diferentes, sin embargo, contamos con condición frente a la ley, igual que todos los otros sujetos de derecho (p. 29).

En un análisis del derecho a la igualdad que alberga nuestra Constitución, aquel dice “no deben ser discriminadas por su raza, sexo, origen, religión, condición económica o de cualquier otra índole”. Si analizamos esa

‘condición de cualquier otra índole’, entraría la condición de sentenciado por terrorismo del señor Yehude Simon, condición por la cual se le excluía del proceso electoral, a pesar de haber sido beneficiado con el indulto. Cierta parte de la academia considera al derecho a la igualdad como un mandato para evitar la discriminación de todas las personas, cual sea su característica. Este argumento se refuerza con la argumentación de Arroyo (2018) mencionando que “es mandato de no discriminación se traduce en una prohibición de tratamientos diferenciados no justificados entre la prohibición resulta exigible en primer lugar al Estado, pero también a los sujetos privados en cualquier tipo de relación” (p. 30).

El concepto de igualdad es más complejo cuando intentamos contextualizar y definir en el plano legal, pues la aquella idea convive con demás normas y principios. Constitucionalmente la igualdad es una de las normativas de mayor importancia, relacionado con el contenido de la dignidad humana.

Según Camacho & Sosa (2005):

“La igualdad constitucional puede encararse desde dos perspectivas: como principio rector del ordenamiento jurídico, al que habrá que dotarlo de contenido en cada caso, siendo en este sentido una regla básica que el Estado debe garantizar y preservar; y como un derecho fundamental de la persona, es decir, exigible en forma individual, por medio del cual se confiere a todo sujeto el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación alguna” (p. 82)

El Tribunal Constitucional ha señalado en la STC recaída en el Exp. N°

0018- 2003-AI/TC:

"La naturaleza jurídica de la igualdad reposa en una condición o presupuesto indispensable para el ejercicio de los distintos y plurales derechos individuales. Por ende, no es un derecho autónomo, sino relacional" (Fundamento Jurídico 2).

La igualdad entendida como derecho consiste en la atribución y disfrute paritario de deberes y facultades otorgados por el marco legal del estado; pero también consiste en la interdicción de la discriminación. Así, los ciudadanos somos entes de derecho en la misma condición.

El Estado a través de la Constitución dota a todas las personas como sujetos iguales, motivo por el cual queda prohibida la manifestación de toda forma de discriminación injustificada. "[...] Las desigualdades muchas veces se constituyen en obstáculos que no permiten el adecuado desarrollo de la persona ni el despliegue de todas sus capacidades." (Arroyo, 2018, p. 31)

a) Alcances del derecho a la igualdad:

En nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la igualdad constituye un derecho o principio y como menciona Arroyo (2018) tiene un doble carácter: subjetivo y objetivo

"El primer aspecto, supone la idéntica dignidad entre todos los ciudadanos para ser tratados de igual modo en la ley. En su segunda dimensión, es la obligación, a cargo del Estado y de los particulares, de no discriminar entre sujetos, lo que no impide facilitarles procedimientos diferenciados, siempre que dicho tratamiento esté justificado en razones objetivas" (p. 31)

Por su parte, Correa (1999) afirma que la igualdad “idea dos o más situaciones o relaciones jurídicas que son comparadas entre sí para determinar si se está produciendo un trato igual o desigual a las personas involucradas.” (p. 152)

3.1.2. Derechos políticos en el estado peruano

En específico, el Derecho de la participación política “tiene su fundamento en el principio de soberanía popular que reconoce al pueblo como la única fuente de emanación del poder (art. 45 de la Constitución) (Mesía, 2018, p. 266). En su acepción estricta, “participar es tener parte o tomar parte de algo; actuar o ser partícipe como integrante de un todo” (Lopez, 1983, p. 367).

Siguiendo los planteamientos del jurista Chanamé (2009):

“Este tipo de derecho (los políticos) son los que nos permiten en nuestra calidad de ciudadanos, a participar sin intermediarios en las decisiones gubernamentales y políticas fundamentales al interior de un Estado democrático y participativo (...) el contenido de este derecho fundamental comprende: (...) **El derecho a acceder a cargos públicos de elección popular** (...) (p. 244).

Según Alcántara (2015), los derechos de connotación política son aquellos que dotan de legitimidad a las personas para participar en los procesos electorales, ya sea para elegir representantes o para formar parte de una agrupación que serán candidatos a representantes; el señor Yehude Simon no pudo ejercer uno de sus derechos políticos (p. 293)

El mismo autor afirma que:

“[...] Los derechos políticos implican la facultad de los ciudadanos de intervenir en la formación de la voluntad política del Estado y, en general, de la vida social del país a través del ejercicio de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, por eso a estos derechos se les ha denominado “derechos de participación”.(Alcántara, 2015, p. 232)

Nuestra Carta Magna señala en su Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos públicos: “La finalidad la ciudadanía es su participación en el ejercicio del poder por el pueblo; además tiene muchas y variadas formas de ejercitarse. La común en ejercitarse es en la democracia representativa pues se dispone a elegir y ser elegido por periodos. En los procesos electorales, donde acuden a las urnas, el ciudadano participa en la elección de representantes”.

La Comisión Interamericana ha remarcado y enfatizado la ineludible y estrecha relación existente entre la vigencia democrática y un adecuado ejercicio libre de las facultades políticas y en general efectivización y cautela de los derechos humanos. El derecho de formar parte de las estructuras estatales de gobierno y ser partícipes de sufragio verdadero, periódico, libre y de voto secreto es de vital importancia para la protección de DD.HH. El motivo para aquella observancia, es porque la historia ha demostrado que los gobiernos surgidos de culturas democráticas, han permitido mayor confianza en las instituciones y fortalecer el Estado Constitucional de Derecho que debería garantizar el irrestricto respecto a los DD.HH.

3.1.2.1. Participación ciudadana y política

En opinión de la máxima autoridad electoral del país, (JNE, 2018, p. 8) asevera que; por participación ciudadana se entiende que es un derecho y una oportunidad que tienen las personas ya sea de manera individual o de forma colectiva, en la que ellos, los ciudadanos pueden expresar no solo sus intereses sino también las demandas importantes que van a influir para formular y tomar decisiones determinantes; esto se realiza tanto en el gobierno central, en las regiones y en las localidades. Esta participación tiene un impacto importante positivo en las organizaciones de la sociedad civil pues ayuda a mejorar no solo la capacidad de gestión estatal sino la calidad de vida de los ciudadanos participantes.

La participación es parte de la democracia, está vinculada con la ciudadanía y el fortalecimiento institucional del Estado. En este modelo de Estado, las personas ejercen la titularidad respecto a la soberanía. En tanto, quien ejerce el poder públicamente es aquel se manifiesta porque los sujetos soberanos han optado por delegar aquella labor a quienes están actuando en su representación, para que procedan en defensa de los intereses de estos.

Según la Sentencia 5427-2009-AC/TC, “El derecho a la participación ciudadana hace posible que todos intervengan libremente en las esferas política, económica, social y cultural de la nación. De lo anterior, se desprende que, en el marco de los derechos de participación ciudadana, comprende no sólo el ámbito de la

participación política, sino también la participación en diferentes ámbitos de nuestro Estado.” (Fundamento 63).

El T.C. realiza un análisis detallado en la Sentencia 5741-2006-AA sobre el derecho a participar en la vida política emanado del artículo 2º inciso 17 de laC.P., afirma que éste, como derecho fundamental, contiene en su ámbito de protección, el amparar a que puedan intervenir libremente en los procesos, así como para que tomen decisiones tanto en el ámbito político, económico, social y cultural. Siendo un derecho amplio en su contenido, por lo cual es necesario que intervengan las personas en todos y cada uno de los procesos de toma de decisiones de los diferentes niveles de organización del país. De manera que no limite la participación del sujeto en el aparato estatal o las instituciones estatales, sino que amplíe la participación del sujeto en la sociedad estatal, ya sea a nivel de organizaciones públicas o privadas.

La democracia se sustenta en mecanismos participativos, porque permite la gestión conjunta del desarrollo sostenible y la calidad de vida de las personas.

Por esta forma se favorecerá el incrementar el índice del desarrollo humano de las regiones más pobres del país (JNE, 2008, p. 5)

3.1.2.2. Diferencias entre la participación política de la participación ciudadana:

- Participación política:

Respecto al derecho de participación que tiene todo ciudadano, (Campos, 1991) afirma que “el hombre es el protagonista de todas las formas de participación significando esto el reconocer que es parte de algo; es así que su participación tanto en tomar y recibir sobre las decisiones en lo que participa, le corresponden.” (párr. 5.)

Como afirma (Campos, 1987, p. 95) sobre la participación política se considera un derecho subjetivo esencial de la ciudadanía, estando prevista en nuestra Constitución, derecho el cual se debe entender como “funcional” en tanto se asocia al desempeño de una función pública y “política”, pues está vinculado a que se es miembro de una colectividad.

- Participación ciudadana

Carpio, (2013) menciona que:

“La participación con respecto a la sociedad civil donde se tratan temas y proyectos importantes que involucran a nuestro país, es considerado un derecho fundamental, que no solo es reconocido por la norma nacional sino también por la supranacional, normas que están reconocidas en tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado, que establece que toda persona tiene derecho a participar en los proyectos de su país.” (p. 9)

La participación es un derecho que tiene todo ciudadano el cual le da la facultad de tomar decisiones, incidir en la gestión y las políticas públicas. Un derecho establecido en la Constitución Política de la República.

Reiterando las palabras de Carpio (2013) la participación ciudadana son mecanismos que cuentan los ciudadanos, son decisiones para manifestar sus intereses, que lo pueden hacer de forma individual o como un grupo social.

Por eso afirma que:

Nuestra constitución política del Perú aborda tanto el derecho del ciudadano a participar en los asuntos públicos, como también una diversidad de mecanismos y/o medios a través de los cuales las personas podrían ser partícipes en asuntos públicos de los ciudadanos, pero también se refiere a una gama de mecanismos y/o formas mediante las cuales las personas pueden participar en los asuntos públicos.” (p. 10)

3.1.2.3. Derecho de elección o sufragio

Este derecho debe ser acogido en sus dos manifestaciones: activa (derecho a elegir) y pasiva (derecho a ser elegido). Este se encuentra reconocido en el artículo 2° 17 y 31° de la Constitución Política.

El principal derecho que se menciona por la importancia es el de la participación en la votación que tiene por fin designar de forma

democrática a los que unirán los órganos del Estado para dirigir los asuntos en nombre del pueblo; mientras que el derecho al sufragio otorga a los ciudadanos el derecho de acudir a los citados órganos y obedecer las decisiones electorales del pueblo, tal como lo afirma también (Bernal, 2006, p. 9).

En otras palabras, el derecho al sufragio también permite el ejercicio del derecho a desempeñar funciones públicas representadas o elegidas por el pueblo, que todo ciudadano ostenta como miembro del cuerpo electoral.

El artículo 31° de la Constitución Política (CP) el cual se refiere al mismo derecho precisa que se efectúa acorde a los términos y condiciones de los procedimientos establecidos por ley especial, de ahí su naturaleza de ser también un derecho de configuración legal.

A raíz del marco constitucional existente, la Ley N° 26859, Orgánica de Elecciones (LOE) y sus actuales modificaciones regulan detalladamente los procedimientos electorales, instituyendo condiciones positivas (mayoría de edad, nacionalidad, registro de inscripción) y negativas (prohibición e impedimento), así como posibles recursos impugnatorios a ser propuestos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Pleno del JNE.

Según Carrera (2008) “Los peruanos por nacimiento y mayores de 18 años que hayan sido anteriormente inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC y que se encuentren libres de prohibiciones para poder gozar del derecho al

voto.” (p. 377)

El derecho de sufragio son derechos a elegir y a ser elegido; subjetivamente el sufragio es la facultad del ciudadano a votar, o ser candidato, quizá de no serlo, mientras que la dimensión objetiva apunta a instituirlo como un principio fundamental del sistema democrático.

El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Exp. N° 00030-2005-PI, f. j. 63, menciona que el derecho al sufragio es:

“se considera un derecho fundamental al derecho al sufragio activo el cual conforme al artículo 31 de nuestra Constitución este trata sobre que el titular de este derecho le corresponde a todo ciudadano mayor de 18 años; es por eso que suspender la ciudadanía mientras está relacionada a causas previstas en el artículo 33 de la Constitución produce el suspenso del ejercicio del derecho al sufragio.”

(Fundamento Jurídico 63).

3.1.2.4. Democracia y derechos políticos

Es imprescindible destacar que la democracia como principio esta contenido de forma inherente al Estado Constitucional, como figura articuladora de la sociedad con los espacios gubernamentales.

Garantizar este principio articulador de la unidad del Estado significa, en palabras de Borea (2007) que:

“Entre los miembros de un mismo pueblo no hay diferencias (ante la ley). Todos tienen el derecho (y en otras sociedades el deber)

de participar en la discusión de los asuntos públicos y de opinar acerca de la marcha del Estado” (p. 220-221).

Por su parte Alcántara (2015) citando a Fernández del Valle, afirma que la democracia “es un estilo de gobierno que brinda a las personas la igualdad esencial de oportunidades para gozar sus derechos civiles y políticos, confiando en la sociedad y las personas para reestructurar el poder.”

Según Dahl (1992) la democracia es un proceso que promueve el desarrollo humano. En este proceso se promueven intereses de los seres humanos.

Mientras que para Kelsen (2008) la democracia es una idea de libertad, una expresión jurídica, pero que sigue siendo parte del Estado.

Desde la jurisprudencia, el TC peruano emitió la sentencia 4677-2004-PA/TC que en su fundamento 12 indica que el principio democrático es:

“no sólo para conceder que toda capacidad, atribución o facultad para el poder del pueblo y su voluntad la cual está plasmada en la Norma principal del Estado (principio jurídico de la supremacía constitucional), sino que, asimismo, por ser necesario de que dicho reconocimiento inicial sea anunciado como una realidad regular en la vida social del Estado (...)” (Fundamento jurídico 12).

Así, se explica de esta manera que el principio democrático

reconoce un principio de naturaleza política, que es el de soberanía popular, por el cual se ve la soberanía popular, en donde se entiende que aquellos poderes que se mencionan, provienen del pueblo, sin embargo, reconocer esta soberanía no será suficiente, excepto que, luego de ser institucionalizada en las formas correspondientes, cada individuo o grupo goce plenamente de la capacidad de participar activamente en aspectos multidimensionales de la vida política, social y cultural toda la Nación. Así, tenemos que la sociedad en la que los derechos no estén garantizados -cualquiera que sea su naturaleza o categoría- simplemente no es considerada una sociedad con plena democracia, o en su defecto será una democracia débil.

3.1.2.5. Derechos políticos

Sobre los considerados derechos políticos, tenemos que son las atribuciones y facultades que derivan por nuestra condición de ser ciudadanos. Es así, que, mediante ellos, en forma individual o asociada, se asegura la presencia a la hora de gestionar los asuntos políticos. Estos se refieren a todas las condiciones que permiten a los ciudadanos participar en la vida política. Por medio de este se establece la relación entre los ciudadanos y el Estado y así se torna el fortalecer el diálogo entre los gobernantes y quienes somos gobernados (Borea, 1994, p. 98)

Según Ferrero (1981) los observa como: “el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política del Estado” (p. 153)

Mesía (2018) señala que son condiciones de cada ciudadano

para poder participar en política. El caso del señor Yehude Simon se le negó la condición de participar en un proceso electoral para asumir un cargo público, por una ley que para bien o para mal limitaba el derecho de participación política. El autor menciona que:

“Acerca de los derechos políticos estos con el tiempo fueron conceptualizados como un conjunto de disposiciones que permiten a los ciudadanos participar en la vida política. En particular, el establecimiento del vínculo entre los ciudadanos y el Estado, el diálogo que deben tener los gobernantes con los gobernados. En definitiva, representan las herramientas de que dispone el ciudadano para así poder participar en la vida pública, o si se quiere, la facultad política de que dispone para participar, configurar y determinar su vida política”. (p. 174)

Estos derechos son instrumentos que tienen los ciudadanos para participar en la vida pública, o el poder político. Con la ley antiterrorismo, para bien o para mal, limita derechos fundamentales, como los ha limitado los del señor Yehude Simon.

3.1.2.6. Derechos políticos en el derecho internacional

El derecho a la participación política también ha sido positivizado a través de la legislación supranacional, por lo que se torna necesario evaluar y analizar su contenido desde la perspectiva que ofrecen los Acuerdos Internacionales de DD.HH.; y las decisiones que en mérito al principio de convencionalidad han asumido los órganos de justicia internacional para proteger su ejercicio.

Considerando lo anterior, el derecho internacional creó normas sobre el derecho de participación política que deben ser cumplidos; es ahí cuando en este sentido los distintos sistemas universales y regionales que han existido para la protección de los DD.HH. tienen normas que les permiten determinar si un Estado respeta todas y cada una de las manifestaciones de este derecho, tales como: el pluralismo político, elecciones libres y justas, pero por sobre todo, si se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a funciones de representación. Esto es así debido a su naturaleza transnacional que permite la confluencia de soberanías. Con la aparición del Derecho Internacional de los Derechos Humanos “los Estados dejan de tener exclusividad en la protección de los derechos humanos, cumpliendo con la principal obligación de alianza con la sociedad” (Llatas, 2010, p. 59).

Los instrumentos internacionales de los derechos humanos son diversos y con diferentes alcances. Los cuerpos normativos de mayor relevancia son: La Declaración Universal de Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En cuanto a los tratados, estos generan relaciones especiales entre los estados y las personas; señalándose que:

“Tiene por objetivo y fin es la defensa de los derechos humanos fundamentales, cualquiera que sea su nacionalidad, frente al propio Estado y frente a los demás Estados Contratantes. Al ratificar estos tratados de derechos humanos, los Estados siguen un orden

jurídico en el que asumen, en el interés común, diversas obligaciones, no con otros Estados, sino con las personas bajo su jurisdicción”.

(Efecto de la reserva a la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 47 y 75), 1982, párrafo 29).

Es necesario mencionar la posibilidad de que el caso de estudio podría haber alcanzado instancias de resolución internacionales.¹⁷ De haber sido así, recalcamos que las resoluciones dictaminadas por las instancias internacionales de DD.HH., dentro de la competencia de las Naciones Unidas o de la OEA, tienen carácter de obligatorio cumplimiento para los estados miembros, de acuerdo a lo establecido doctrinariamente como Principio de Convencionalidad:

“Es considerada una herramienta que permite a los Estados materializar sus obligaciones de garantizar los derechos humanos desde incluso un ámbito interno mediante el cual se verificará que estén conformes tanto las normas en teoría como en la práctica a nivel nacional respetando así la convención americana de Derechos Humanos; siempre que permanezcan vinculados al ámbito jurisdiccional internacional de la CIDH” (Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 17, 2015).

¹⁷ Si bien no han existido casos similares, sí hubieron casos en materia electoral que permitieron crear jurisprudencia sobre los derechos políticos. Véase, por ejemplo, Caso Yatama Vs. Nicaragua.

Sub Capítulo IV: LA VULNERACION DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLITICA EN ELCASO YEHUDE SIMON

4.1. Pleno jurisdiccional 340/2020: otros criterios que determinan la violación del derecho a la participación política

Esta sentencia, resultante de la Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica y el Colegio de Abogados de Lima Sur contra el Congreso de la República, versó respecto a la inconstitucionalidad de la Ley 30717, Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones; la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales; y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, argumentando la trasgresión del Principio de igualdad ante la ley, el Derecho de participar en la vida política de la Nación, el derecho de elegir y ser elegido, y el Principio de irretroactividad de la ley.

Es necesario dejar claro que los demandantes solo refieren como víctimas de afectación a aquellos que en “en calidad de funcionario público y servidor público, sea condenado a pena de prisión, efectiva o suspendida, acompañada de pena consentida o para ejecución de la pena privativa establecida en una sentencia, por haber cometido el delito en calidad de autor por los delitos de colusión dolosa, peculado o corrupción de funcionarios, incluso si han sido reintegrados”.

Respecto al Derecho a ser elegido, se desarrolla en conjunto con el derecho a participar en la vida política de un país y esto involucra que debe participar en los procesos electorales dónde puede ser el elector o el candidato, a con estas dos opciones se desarrolla el derecho a participar políticamente concordante con una Ley Orgánica (cfr. STC 0030-2005-AI/TC, fundamento 27).

Siendo este un derecho de configuración legal, las normas de la materia o leyes de desarrollo constitucional establecen parámetros para su ejercicio, como los requisitos e impedimentos para ser candidato, establecidas en la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones; la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales.

La Ley 30717, en la parte objetada, imposibilita a un ciudadano ser candidato a cargos de representación por elección popular en determinados supuestos. Los impugnantes cuestionan la parte de la disposición que mantiene tal restricción aun cuando la persona hubiera sido rehabilitada, es decir, a pesar de que se haya extinguido su responsabilidad penal.

Para el Tribunal Constitucional está presente aquí el principio de resocialización, por el cual el Estado garantiza que, en la ejecución de la condena, el sancionado:

" Haya desarrollado una serie de acciones que le facilita por su actitud para involucrarse con total libertad en su vida política y de esta manera pueda reinsertarse en la comunidad, quienes tienen las mismas condiciones y derechos que los demás ciudadanos de la nación." (STC 0021-2012-PI/TC, fundamento 213).

Sin embargo, para la ley impugnada en el presente proceso, una persona condenada por sentencia firme como autor de los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios nunca podrá postular a un cargo público representativo, aun cuando hubiera sido rehabilitada.

Existen razones que limitan al derecho fundamental del cual se está desarrollando las cuales son muy explícitas en las normas internacionales, es así que

podemos encontrar premisas muy exactas incluso cuando el juez es competente en un proceso; de las normas antes mencionadas podemos tener en cuenta que concuerdan con nuestra normativa nacional, eso sí que en el artículo 33 de nuestra Constitución menciona que este derecho a la participación política se encuentra suspendido cuando existe sentencia en la que inhabilita el ejercicio de los derechos políticos.

Ante ello, el Tribunal advirtió que la ley objetada infringe la Constitución, pues vulnera el derecho de participación en la vida política del país, en su dimensión de ser elegido, al mantener inhabilitación para ser elegido luego de la restitución de los derechos suspendidos o restringidos por sentencia (rehabilitación). Este derecho, bajo interpretación del T.C. no admite la limitación de su efectivización posterior a la restitución de los derechos civiles y políticos del condenado.

Finalmente, se declara FUNDADA EN PARTE la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30717, por infringir el derecho fundamental de participación en la vida política de la Nación, con respecto al derecho que tiene de ser elegido por esta razón se declaró inconstitucional recalando la frase que aún si estos hubieran sido rehabilitados. Dicha ley introdujo en la Ley 26859; la Ley 27683; y la Ley 26864.

Los demás extremos fueron declarados infundados.

4.1.1. La Ley N° 30717 y su vulneración al derecho a la participación política

4.1.1.1. La emisión de la Ley N° 30717 y su relación con el caso de estudio

Hacia el año 2016, el congresista Héctor Becerril presentó el Proyecto de Ley N° 616 – 2016/ CR, mediante lo cual se buscó aprobar que “las personas condenadas en calidad de autoras por la

comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, (...); tendrían el impedimento de participar en elecciones, sanción resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas”. (Ley N° 30717, 2018).

Esta normativa, de ser aprobada, debía cambiar la LOE, la LEM y la LER. Después de un debate del pleno, se exoneró de Dictamen este proyecto de Ley, enviándose la autógrafa al Poder ejecutivo para su promulgación.

Sin embargo, el expediente es devuelto con las observaciones siguientes:

- 1- Que en el sistema jurídico peruano no existe la institución legal del “indulto razonado”, pues solo es una referencia doctrinaria desarrollada por el T.C. que sin embargo, no constituía ni precedente vinculante ni jurisprudencia vinculante.
- 2- Que, la competencia para regular el derecho de gracia correspondía, en primera instancia, al ministerio de Justicia y finalmente, al mandatario de la República.

No obstante la férrea oposición de distintos congresistas, destacando entre ellos Alberto de Belaúnde (Letona, 2018), la Comisión de Constitución y Derechos Humanos se allanó a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo y remitió nueva autógrafa donde se dejó de lado la propuesta inicial de obviar de su aplicación a los beneficiarios con el Indulto Razonado por error judicial.

La Ley N° 30717 se emitió el 9 de enero de 2018. Si bien la modificatoria emitida buscó “incentivar un perfil idóneo en las candidaturas a cargos de representación pública”, la forma de plantearlo deviene en la vulneración al derecho de participación política de los beneficiados con un razonado indulto. Esto es así porque no se ha exceptuado de su aplicación a los favorecidos con este mecanismo de indulgencia, a pesar de las argumentaciones presentadas en el debate sobre esta ley¹⁸ a favor de que no se consignara bajo la misma condición delictiva a sujetos que, además de haber sido víctimas de un sistema punitivo deficiente, son nuevamente víctimas del estigma provocado por un error que antela sociedad- ni siquiera habiendo sido subsanado – los sigue considerando terroristas.

4.1.1.2. Criterios legales no considerados para la elaboración de la Ley N° 30717 y que causan la afectación del derecho a la participación política de los beneficiarios del Indulto Razonado.

La emisión de esta normativa obvió criterios asumidos por otras instituciones del Estado que se han pronunciado al respecto. En el presente estudio, se hará referencia a tres documentos de vital importancia.

- Exp. N° 1277-99-AC/TC (Caso Ana Elena Townsend Diez Canseco y otros).

Este proceso de cumplimiento fue presentado por la

¹⁸ “¿Qué sucederá con los cientos de peruanos que habían sido injustamente sentenciados por terrorismo y que el propio Estado ha reconocido su inocencia?”. (De Belaunde, 2018).

Congresista Ana Elena Townsend y otros, que buscó exigirle al Estado Peruano el otorgamiento del Derecho a la indemnización por error judicial a los beneficiados con el indultorazonado, siendo declarado FUNDADO, en aplicación al Principio de Convencionalidad.¹⁹

- Lineamientos Generales del Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos (Comisión para la Paz, Reparación y Reconciliación – Ministeriode Justicia).

Teniendo en consideración las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación²⁰, se creó la Comisión Multisectorial de alto Nivel para el seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional. Mediante el documentocitado, se ordenó ““Deben anularse los antecedentes policiales judiciales y penales con respecto a las personas que fueron indultadas por inocencia y de aquellos que estuvieron en prisión sin tener una condena o porque su proceso fue a base de violencia”²¹. Para el caso en concreto, no se tuvo a consideración que el Sr. Yehude Simon era una persona beneficiada con la habilitación de sus derechos políticos y que inclusive figuraba como inscrita en el Registro Único de Víctimas, con el Código N° P15001684.

¹⁹ (Exp. N° 1277-99-AA/TC, Fundamento 17).

²⁰ “(...) crear un programa especial para restituir los derechos a las víctimas, cuyo objetivo consiste en reestableceren el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos ciudadanos, civiles y políticos, a la población afectada, buscando su rehabilitación jurídica” (CVR, 2003, Tomo IX, p. 184).

²¹ Se define a los beneficiarios de esta modalidad como “la prisión sufrida por personas en base a procesos judiciales por los delitos de terrorismo o traición a la patria, (...) las personas que fueron indultadas en virtud dela labor realizada por la Comisión Ad Hoc creada por mandato de la Ley N° 26655 (...) siempre y cuando la causa

- Informe – 010 – 2009 – DP, de la Defensoría del Pueblo.

Este documento emitido por la Defensoría del Pueblo, no solo estableció la responsabilidad de Estado en las detenciones arbitrarias y los errores judiciales, sino también argumentó que “En tal sentido, en las situaciones en que los derechos se vean afectados por el abuso de los impuestos y de la acción judicial y consecuente encarcelamiento de una persona, el Estado está obligado a remediar los referidos efectos ya reparar el daño causado a la víctima”. (Defensoría del Pueblo, 2009, p. 59).²²

4.1.2. Caso Yehude Simon

En las elecciones Regionales el Dr. Yehude Simon Munaro fue candidato a la gobernación regional de Lambayeque, su personero presentó la solicitud de inscripción ante el Jurado Electoral de Chiclayo el día 13 de junio del 2018 y mediante Resolución N°065-2018 el J.E.E-CHYO/JNE de fecha 16 de junio del 2018 declara improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos para gobernador y vicegobernador regional de Lambayeque por el impedimento legal establecido en el artículo 14, numeral 5, literal f de la Ley N°27683, Ley de Elecciones Regionales establece: “En tal sentido, en las situaciones en que los derechos se vean afectados por el abuso fiscal y la acción judicial y consecuente detención de una persona, el Estado está obligado a reparar tales efectos y reparar el daño a la víctima.”

En esa línea de razonamiento legal, en la resolución se expresó que el

²² expresada en el expediente de indulto o derecho de gracia sea la presunción de inocencia”. (Reglamento de Inscripción del RUV, Artículo 19.1).

Señor Yehude Simon Munaro fue condenado por delito de apología al terrorismo y por tanto, “estaría impedido a postular”.

El mismo 16 de junio fue notificada la organización política, luego el personero titular del partido político Juntos por el Perú interpuso el recurso impugnatorio de apelación el día 19 de junio del 2018, cuyos argumentos principales de la impugnación fueron; Ley N° 26655 “Ley que crea la Comisión encargada de proponer al Presidente de la República la concesión de indulto a personas condenadas por delitos de terrorismo o traición a la patria) y la Resolución Suprema N° 258-2000 JUS, donde se consideraba el indulto no como eximente de la responsabilidad penal sino como posibilidad inmediata para liberar a un inocente, el cual había sido sentencia por error judicial.

Finalmente el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones con fecha 27 de junio del 2018 revoca la Resolución N° 065-2018-JEE –CHYO/JNE.

Para la determinación del nivel de afectación y el grado de satisfacción del Derecho a la Participación Política en el presente caso, se aplicará el Test de Proporcionalidad.

4.1.3. El Test de proporcionalidad

En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N. ° 0016–2002–AI/TC, de 30 de abril de 2003, desarrolla sobre “el test de proporcionalidad”, en el cual hace mención una secuencia para usar este examen, así como el objetivo de realizarlo; al respecto mencionan que:

TC fue objeto de una desconcertante medida legislativa para comprobar la adecuación y, como primer paso, se dictó la sentencia satisfactoria

mencionada anteriormente. Tras la reiteración de lapropia sentencia de idoneidad, el citado TC cuestionó en primer lugarla finalidad de la medida: “pertinente preguntarse si la finalidad legislativa de hacer del derecho de propiedad un derecho defendible es frente a terceros (registrarla) o no, la reducción de costes supone la obligatoriedad del uso de documentos públicos para el registro, endefinitiva sin sacrificar el principio constitucional de seguridad jurídica hasta el punto de que 'será desproporcionado aunque la finalidad sealegítima” (Fundamento Jurídico 6).

Por su parte, Pulido (2005) explica que para la teoría de la argumentación es necesario realizar un test de ponderación, llegando a la conclusión de que “Cuanto mayor sea el grado o limitación de uno de los principios, mayor será la satisfacción del otro principio”. (p. 99)

a) Aplicación del test de proporcionalidad

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP.N. ° 579-2008- PA/TC- LAMBAYEQUE; desarrolla no solo el test de proporcionalidad, sino también 3 sub-principios que se desarrollan de manera simultánea con el testde proporcionalidad; asimismo van relacionando estos principios argumentativos con la influencia de los derechos fundamentales, toda vez queun juez o colegiado resuelve su sentencia con el test.

El Tribunal menciona en su fundamento 25 que:

“Tal como establece este Colegiado, el test de proporcionalidad incluye tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación oproporcionalidad en sentido estricto. En cuanto al procedimiento a seguir para aplicar el test de

proporcionalidad, hemos establecido que las decisiones que afecten derechos fundamentales deben someterse en primer lugar a un juicio de adecuación o de adecuación, es decir, si la restricción del derecho es pertinente o conveniente para el fin previsto y protegido; en segundo lugar, una vez realizado este primer análisis, el siguiente paso es analizar la restricción desde el punto de vista de la necesidad; esto supone, como hemos subrayado, verificar si el legislador ha aprobado algún medio alternativo. Este es un análisis de la relación de medias, es decir, una comparación entre medias; los medios elegidos por quien se inmiscuye en el campo de los derechos fundamentales y los medios o medios de presunción que hubieran podido aplicarse para lograr el mismo fin. Finalmente, tercero, y siempre que la medida haya superado con éxito los ensayos o etapas anteriores, se debe continuar el análisis de ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual *“cuanto mayor es el grado de la insatisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”*. (...) Análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. El tercer paso del test de proporcionalidad consiste en establecer el peso o importancia de los principios jurídicos en conflicto. La actividad aquí señalada debe realizarse conforme a la ley de pesos, según la cual, *“Cuanto mayor sea la atribución en el ámbito de la potestad de ejecución, mayor será el grado de satisfacción o logro de los fines constitucionales previstos con la ley”*. hay que ser muy solidario con la industria azucarera”.

Por su parte (Alexy, 2009) menciona que;

“El tercer paso realizado en la resolución examinada falla al no se pudo determinar la influencia y la satisfacción de cada derecho en el conflicto, ni

siquiera la identificación completa de las causas. Tampoco se implementa la regla de colisión, ya que es necesario hecho desde el primer paso - por lo que la afirmación de que "hay un equilibrio entre suspros y sus contras" no tiene base ni significado" (p. 8)

4.1.4. El principio de razonabilidad

Afirma Prevost (2008) que;

La racionalidad determina si las decisiones y acciones son materialmente justas y, por lo tanto, si son válidas. Sin embargo, esto todavía no es suficiente para relacionarse con el concepto de ponderación y reconocer cuándo una restricción es justa o injusto. (p.102)

Según Linares (1989) la "razonabilidad jurídica" como valoración de justicia:

Se considera que hay una razonabilidad técnica a la que se refieren que no tiene nada que ver con un estándar de valores ya que esto sería un poco subjetivo, es por eso que se considera únicamente como una forma técnica y eficiente que sirve para poder obtener un resultado cierto; a esto se le considera como un alcance de razonabilidad de lo contrario no estaría ante este supuesto. (p. 109)

Por su parte Còrdova (2005) dice que para el TC, "la razonabilidad comporta una adecuada relación lógico- axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado". (p. 7)

El Tribunal Constitucional no sólo ha hablado del principio de

razonabilidad, también desarrolla sobre el test de razonabilidad en su sentencia en el EXP. N°2235–2004–AA/TC, de 18 de febrero de 2005, f. j. 6, en el cual menciona que:

“A través de este test se puede controlar primero, que el tratamiento que se está viendo diferenciado está con justificación o está justificado; como segundo supuesto tiene que entre la medida que se adopta y la finalidad que persigue hay una relación; y finalmente tiene por el solo hecho de ser una medida precisa y necesaria que respeta el principio de proporcionalidad entregado para estudio.” (Ob. Cit).

El Tribunal Constitucional en el EXP. N° 1277–2003–HC/TC, de 17 de junio de 2003, f. j. 6; desarrolla también el equivalente del test de proporcionalidad, haciendo mención de la diferencia que tendría con el test de razonabilidad, diciendo que:

“Con el test mencionado de razonabilidad, cómo lo especifica y lo ha definido el TC, este es un test que se vincula con el test de proporcionalidad pero que no es el mismo en su forma se diferencia. Eso sí que es así que el TC ha mencionado sobre el test de razonabilidad tiene intervención con el estado y la economía. Aparte del hecho de que no se puede ni se debe suponer que la simple invocación de fines explícitamente compatibles con la norma subyacente pueda legitimar el ejercicio de todo tipo de alternativas, no se puede negar reconocer que un examen detallado de estos fines (estas alternativas) debe inferirse si en realidad eran los únicos capaces de alcanzar los fines fijados, o si por el contrario existían otros fines, ni especiales ni urgentes, que hubieran podido servir para alcanzar aquellos fines de similar objetivo”.

En similares terminologías, la sentencia contenida en el EXP. N.º 0090-2004-AA/TC, expresó que:

“Se sabe que ámbito doctrinario distingue entre el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, considerándolas estrategias que sirven para poder resolver los conflictos entre los principios constitucionales y orientar a los jueces hacia una decisión no arbitraria, igual; podrá establecer la similitud entre los dos principios, con la condición de que la decisión a tomarse será conforme el marco de los dos principios en materia constitucional, cuando no respete el principio de proporcionalidad, esto no se considera razonable.” (Fund.18). Y es que “A pesar de que la doctrinal reconoce la autonomía como concepto de forma general, la proporcionalidad es un modo más que tiene la razonabilidad.

En la STC Exp. N.º 02235-2004-AA/TC del 18 febrero de 2005, el Tribunal modificó su razonamiento, estableciendo que:

“En el ámbito de la protección de los fines constitucionales, el Estado al intervenir en el ámbito de los derechos fundamentales justifica sobre la base del principio de racionalidad que exige una medida limitada respecto de la necesidad de mantener, sostener o defender un fin constitucionalmente válido. Es así que, por esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental responde al principio de razón cuando se pretende conseguir un fin legítimo y, y sobre todo es constitucional.” (Fundamento Jurídico 6)

Un ejemplo donde el Tribunal Constitucional observó la inaplicación de este principio pudo observarse en la sentencia contenida en el Exp. N.º 0010-2002-AI/TC del 3 de febrero de 2003, que expresó:

“Sobre la cadena perpetua tenemos que esta es considerada lamedida desproporcionada de entre las demás, y la razón es porque es inadecuada cuando se deber relacionar con los fines constitucionales con respecto a la pena, ya que sólo pueden orientarse que estas personas condenadas resocialicen, sin tener encuesta que ir hacia la "objetividad de su transformación", en la que finalmente se considera objeto de política criminal del Estado, no teniendo en cuenta otras posibilidades de aplicar medidas de resocialización.” (Fundamentos Jurídicos 187, 188 y 195)

Con estos ejemplos, se da cuenta que el Tribunal Constitucional aplica el test derazonabilidad y el test de proporcionalidad, para así poder ponderar entre derechos y deberes consignados en nuestra Constitución.

Por su parte Atienza (2006) explica sobre el juicio de la razonabilidad, que:

“Los teóricos dedicados al derecho llaman al juicio de razonabilidad como una justificación externa respecto del razonamiento, especialmente en ausencia de normas o, en su caso, problema de interpretar o probar.” (p. 147).

Según Castro (2010), “los llamados juicios de razonabilidad – además de lo queya se conoce – van dirigidos en dirección a la justicia. Es así que, desde este aspecto, lo que se busca es que la decisión que se tome, en gran posibilidad seala más justa respetando el parámetro de valores, así como el de justicia.” (p. 257)

A su turno, otro gran jurista planteó tres criterios para conseguir juicios de razonabilidad:

- a) la corrección de la elección y de la interpretación de la regla jurídica aplicable al caso;
- b) la comprobación fiable de los hechos relevantes del caso y;
- c) el empleo de un procedimiento válido y justo para llegar a la decisión. Estos han de ser criterios que confluyen y la sola ausencia de alguno de ellos, hace inviable la pretensión de justicia (la razonabilidad diríamos) de la decisión (Taruffo, 2003, p. 162).

4.1.5. El control difuso

Sobre el control difuso se menciona que los países que cuentan con este sistema de interpretación constitucional se deben ceñir al caso en concreto, como parte de la naturaleza de este control. En el caso del señor Yehude Simon, el colegio del JNE resolvió como procedente su candidatura. Sin embargo, el fundamento de voto del Magistrado Chanamé Orbe sustentó la inaplicación del impedimento de sentenciado por terrorismo por considerarlo contrario a la Constitución Política apelando a la figura del Control Difuso. Al respecto, Sagués (2008) menciona que:

“Sobre el control difuso se precisa que hay algunos países con este sistema indicando que éste se delimita al caso en concreto; pero que este sistema se usa en diferentes vías ya sea, en el derecho consuetudinario que es el que conocemos se aplica a base de las costumbres, también por la vía de las sentencias corte suprema que son las más conocidas ya que estas tienen un efecto vinculante. Y se recalca que esto no es para hacer del derecho algo que se aplique porque así lo quieren nada más.” (p. 154)

Por su parte Pina (1973) dice que lo importante del control difuso es que los jueces ordinarios puedan resolver sobre las lagunas legales en materia constitucional relacionado a los derechos fundamentales, ya que control difuso es el único objeto de protección que los jueces o colegiados ordinarios podrían resolver y pronunciarse jurisprudencialmente; además de que el efecto que genere la sentencia será exclusivamente para el caso que está tratando. El autor hace referencia al sistema alemán, del que es importante conocer ya que tenemos influencia jurídica alemana. Al respecto dice:

“lamenta que los legisladores no hayan cubierto ese vacío legal, teniendo 3 supuestos a los que él le llama recaudos, y que han sido promulgados por el tribunal constitucional federal de Alemania; siendo estos los siguientes: primero que después de haberse transcurrido un tiempo razonable para poder tipificar la mora legislativa; que exista una directriz constitucional precisa y taxativa en esta materia; que este vacío tenga la posibilidad de que sea rellenado con la interpretación del juez.” (pp. 72 - 108.)

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N° 03741-2004- AA/TC, sobre la doctrina jurisprudencial constitucional, esto es lo que desarrollan como tribunal y que queda como precedente, diciendo que:

“La doctrina jurisprudencial ha precisado en el ámbito constitucional que esta se encuentra compuesta por:

- a) La interpretación de la Constitución que ofrece este Colegiado, en el parámetro de procesos, siendo para el control normativo, así como la posibilidad que sea para la protección de los derechos fundamentales.

b) Las interpretaciones constitucionales de la ley, realizadas en el marco de su labor de control de constitucionalidad; y hay normativa que ha sido confirmada por el Tribunal, la cual menciona que no podrá ser inaplicada por los jueces que tengan el ejercicio del control difuso, salvo que el Tribunal solo se haya pronunciado por su constitucionalidad formal” (Fundamento Jurídico 42).

El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Exp. N° 0019-2005- AI/TC, explica acerca del uso del control difuso y el poder judicial, mencionando que:

“Al evaluar si tienen el deber de poder de ejercer un control difuso sobre una determinada ley, todos los jueces del Poder Judicial, bajo la responsabilidad de la ley, están obligados a revisar y observar la interpretación presentada por nuestro Tribunal Constitucional pues tiene una clara conexión con el asunto (...)” (Fundamento Jurídico 66).

Para Guastini (2001) “Son las leyes las que se encuentran sujetas a revisión judicial para identificar la legitimidad constitucional, por lo que los jueces pueden desestimar el aplicar la ley que sea considerada inconstitucional (control difuso), o incluso pueden anularla (control concentrado).” (p. 68). Y esa función la debe cumplir cualquier tribunal o juez ordinario, con el fin de defender los derechos fundamentales; al respecto menciona, Alcántara (2015) sobre el sistema de control difuso que:

“El sistema de control difuso es un sistema en el que cualquier tribunal puede declarar la inaplicabilidad de una ley o de una jerarquía ley inferior a la Constitución, en un caso particular en el que el tribunal tenga conocimiento.

Cuando una decisión de una autoridad de control invalida o desregula el ámbito constitucional, estamos hablando de control abstracto, generalizado o sesgado. Cuando una misma pena deja sólo una prescripción legal pero no procede en el caso de que se trate, nos estamos refiriendo a un control de constitucionalidad específico, de efecto específico o entre partes, es decir que queda vigente aquella ley que ha sido inaplicada.” (p. 132)

El mismo autor nos refiere el rol de los órganos de administración de justicia respecto a la aplicación del Control difuso, que:

“ los llamados a impartir justicia son los órganos jurisdiccionales como los tribunales constitucionales; quién administra justicia lo hará a través de órganos colegial dos con sus respectivos tribunales administrativos; por eso se recalca y se menciona constantemente qué esto es ministración de Justicia queda a disposición de ser revisada con respecto a si las normas que están aplicando van en concordancia con nuestra Constitución, asimismo es importante verificar que prevalezcan en todos los casos la norma constitucional sobre cualquier otra norma legal, o cualquier otra norma que tenga rango inferior. Se menciona que todo tribunal u órgano colegiado que administre públicamente la justicia teniendo esta facultad y deber sobre todo para aplicar sobre cualquier otra norma nuestra Constitución o en aplicar una disposición que vaya contra Nuestra Constitución, ya sea de forma o de fondo respetando artículos como el 38, 51 y 138 de la Constitución. Es por eso que se han previsto algunos supuestos presupuestos cómo: que al momento de realizar el examen para identificar la constitucionalidad este sea importante a la hora que se resolverá la controversia que ha sido planteada dentro de este proceso administrativo; que la ley que está haciendo cuestionado se pueda realizar una

interpretación conforme a nuestra constitución. (f. j. 50)’. Es lo que ha previsto el tribunal constitucional respecto al control que debe ejercer cualquier juez o tribunal, indicando que éste se puede realizar de oficio o por pedido de la parte.” (Alcántara, 2015, pp. 132-133).

El Tribunal Constitucional en el Exp. N° 1109 -2002-AA/TC, F.J. 22, hace interpretación de lo que es el control difuso, como ejerce este y su validez previasu aplicación; asimismo el TC ha manifestado que este control es complejo, ya que lo aplican jueces ajenos a los tribunales constitucionales, sin embargo es importante que hagan la interpretación de la Constitución, esto es en defensa delos derechos fundamentales que consagra nuestra Carta magna.

Por su parte, otro jurisconsulto nos menciona que el control difuso “Brinda la facultad y la obligación al poder judicial de que todo el proceso está asegurado;pues te existir alguna incompatibilidad la norma constitucional y una norma legalde menor jerarquía, los justiciables preferirán a la primera. Asimismo, hacen la misma distinción de la norma legal de otra que tenga menor jerarquía.” (Rubiños,2014, p. 83).

De otro lado, Villa (2010) aseveró:

“se entiende por control difuso a aquello que tiene por finalidad de que las resoluciones administrativas tengan en la práctica a considerar preceptos constitucionales, mencionando comocaracterística que éste se encuentra limitado para accionar respecto a otro órgano jurisdiccional, ya que se podrían aplicar la ley inconstitucional al caso concreto pero la norma quedará vigente; es así que se puede inferir que a pesar de haber declaradoinconstitucional una norma esto podría volver a ser invocada en algún otro proceso diferente, y esto

sucedirá hasta que se derogue. Pero el control difuso tendrá como efectos a la hora de aplicarse que, surtirá efecto solo para las partes que están vinculadas al proceso.” (p. 133).

Reafirmando las limitaciones del control difuso, Zegarra (2010) que el control difuso “este sistema lo va a ejercer cualquier juez e incluso y sobre todo el tribunal constitucional, surtiendo efectos de la sentencia solo para las partes del proceso en cuestión” (p. 67).

Respecto de los jueces, se menciona que:

Los jueces están obligados a cumplir todas aquellas normas que por estar conformes al orden constitucional y no transgredirlo se ha declarado su constitucionalidad; y no pueden los jueces invocando su facultad de control difuso inaplicarlas, pues, de hacerlo, los jueces incurrirían en el delito de prevaricato. (Panillos, 2008, p. 119).

El Tribunal Constitucional en el EXP. N.º 1124-2001-AA/TC, ha desarrollado no solo que el control difuso es complejo, sino que para que aquel pueda aplicarse debe contar con presupuestos, a razón de ellos es que se considera que no es ejercer un acto simple; recordemos que se hace una interpretación a la Constitución para resolver en favor de lo que protege nuestra Constitución. El máximo intérprete de la Constitución hace un desarrollo de estos presupuestos en la sentencia mencionada, afirmando que:

“Se entiende al control difuso como un acto relativamente complejo pues una parte significa que la aplicación de esta norma al inicio es beneficiada por la presunción de la legitimidad con respecto a las normas del Estado. Es así

que es considerado un acto no simple, puesse requiere que este sea válido a la hora de verificar el caso, teniendo en cuenta los siguientes presupuestos:

- a. Que lo que será objeto de impugnación es un acto que constituye aplicar una norma que es considerada inconstitucional, esto sucediendo en un proceso constitucional. (artículo 3° de la Ley N.° 23506).
- b. Que la norma que no se aplicará tenga relación directa, pero sobretodo principal con la resolución del caso que se está tratando, esto quiere decir que esta resolución sea relevante a la hora de resolver la controversia.
- c. Que la norma que no se aplicará sea Que la norma que no se aplicará sea muy evidente la incompatibilidad con la Constitución, así después se haya interpretado de conformidad a esta; lo mencionado es en virtud a 1 de los principios previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. (Fundamento Jurídico 13).

El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el EXP. N.° 1383-2001- AA/TC, de 15 de agosto de 2002, f. j. 16, en el cual menciona que el uso del control difuso implica no solo un deber que tiene el juez ordinario o los colegiados ajenos a los tribunales constitucional, como lo es el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones; sino que el máximo intérprete de la Constitución dice que este es un gran poder. Menciona que:

“Al control difuso desde el ámbito constitucional de las normas constituye un poder que se le otorgará al juez de conformidad con el artículo 138 de nuestra Constitución, hola pues brinda un mecanismo que hará prevalecer el principio de la supremacía constitucional pero sobre todo teniendo

en cuenta la jerarquía normativa que tiene nuestra norma suprema siendo esta nuestra Constitución según lo previsto en su artículo 51. Como muchos concuerdan que este es un acto complejo en el sentido de que esto significa preferir la aplicación de una norma cuya validez no debería estar”.

Complementando esta idea, Cruz (2013) menciona que el control difuso, “a la fecha, es muy parco y “casi no hay huella de él”. Sin embargo, reconoce que

“donde se dio un amplio control de la constitucionalidad [...] pero sí importante -fue al defenderse los derechos fundamentales [...]”. (p. 717)

Pero Badeni (2006), incidiendo en las limitaciones que presenta este tipo de control menciona sobre decisiones de la Suprema Corte que:

[...] no son vinculantes necesariamente para los jueces inferiores; pues declarada la inconstitucionalidad de esta norma, la Corte Suprema podría conservar la vigencia y que esta sea aplicada por otros jueces inferiores en casos parecidos hoy incluso iguales de presentarse posteriormente. (p. 296)

Asimismo, el Tribunal Constitucional en su sentencia que recae en el EXP. 01124-2001-PA, alega la importancia del uso del control difuso, diciendo que este es:

“el tribunal ha precisado que este es un acto complejo tal como lo han indicado parte de la doctrina, tema de la aplicación de la norma válida que no es derogada y termina siendo presuntamente legítima dentro de las normas del Estado” (Fundamento Jurídico 13).

Capítulo III: Análisis de datos y discusión de resultados

3.1. Tipo de investigación

Por el tipo, esta investigación es Básica y Analítica; por el nivel de estudio es descriptiva - explicativa; y por el enfoque es Cualitativa.

3.2. Métodos y procedimientos para la recolección de datos

3.2.1. Métodos

- a) **Analítico**.- Permite diferenciar aquellos elementos que forman parte del problema de esta investigación y revisarlos de forma separada a todo; esto es que se han extraído las fracciones de un todo, estudiando y explorando por separado para poder identificar la relación que tienen entre sí, precisando que va a ser de forma vinculada y no independiente.

- b) **Inductivo**.- Ya que se va a tener en cuenta que se está partiendo del problema a la teoría, asimismo: “(...) Es un método que se utiliza el razonamiento con el fin de adquirir conclusiones que vayan desde los hechos particulares que han sido aceptados válidamente, para así poder llegar a conclusiones donde la aplicación sea de forma general. Eso sí que este método es utilizado con un estudio individual de cada uno de los hechos y así formar las conclusiones de manera universal las cuales serán consideradas como leyes, principios o fundamentos que respalden una teoría.” (Berna, 2010, pp. 59-60).

3.3. Diseño de contrastación de hipótesis

Se considera el diseño descriptivo o de una sola casilla

$$M= O$$

Donde,

M: es el conjunto de información que se recogerán de la doctrina, jurisprudencia nacional e internacional.

O: es la Ficha de análisis que se aplicará para recoger la información

3.4. Población y muestra de estudio

3.4.1. población

La población estuvo constituida por 893 indultados por la intervención de la Comisión Lanssiers, que integran el grupo de personas beneficiadas con la figura del Indulto Razonado que ven amenazado su ejercicio al derecho de participación política al ser obstaculizadas en su postulación para acceder a cargos de representación por elección popular en aplicación de la Ley N° 30717, durante las elecciones Regionales y Municipales.

3.4.2. Muestra

Se está presentando un muestreo selectivo por conveniencia, ya que la presente es una investigación realizada en una ciencia que no es perfecta, es por ello que se ha tenido que elegir un caso con ciertas características, porque no se ha aplicado fórmula para desarrollar este estudio.

Se tomó el Expediente N° 2018009978 (Caso Yehude Simon) como casuística representativa, al constituir un referente en la trasgresión del fundamental derecho de participación política al aplicarse un requisito que buscó

impedir su candidatura al sillón de la presidencia regional lambayecana, instituido en Ley N° 30717, donde se analizó la Resolución N° 0446-2018-JNE, en la cual el Pleno del máximo ente electoral (J.N.E.) en última instancia declara procedente la postulación del Señor Yehude Simon.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5.1. Técnicas

a) **Análisis Documental**.- Mediante esta técnica se obtendrá datos de documentación contenida en archivos diversos, principalmente textos que se publicaron en especialidades de Derecho Constitucional - Electoral, de la legislación especializada y la jurisprudencia específica (Expediente N° ERM.2018009978 – Caso Yehude Simon)/ la Resolución N° 0446-2018-JNE del Pleno del J.N.E.

3.5.2. Instrumentos

b) **La Ficha**.- Es el formato utilizado en la técnica de análisis documental, y será de utilidad para organizar las fuentes y localizar los datos que se vayan consiguiendo de la revisión de la documentación sustentatoria de la presente investigación.

3.6. Presentación de datos

Los datos cualitativos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos fueron mostrados mediante fichas y guías de entrevista, cuya información fue confrontada en la discusión.

3.6.1. Procesamiento

- c) **Crítica y discriminación de datos.**- estos datos que se obtendrán y que se encuentran en guías y fichas de entrevista, han sido evaluados por el investigador, con la finalidad de revisar si estos son complejos, de ser el caso que han sido obtenidos de manera correcta o si son auténticos, de tal forma que solo se queda con los datos confiables y con los que no y así poder descartar.

- d) **Tabulación de datos.**- son los datos que ya han pasado por un proceso de crítica así como de la discriminación de los datos, ya que estos se encuentran presentes en fichas en guías de entrevistas, y otros; eso sí que se les asigna un código el cual se tendrá en cuenta para su esquema de investigación al momento de anexar al final del presente proyecto de investigación.

- e) **Tratamiento de datos.**- Los datos que fueron tabulados, han sido ordenados conforme al código que se les consideró asignar, con la finalidad de que se realice un análisis, conforme a lo propuesto en el método de análisis, expuesto precedentemente.

3.7. Análisis estadísticos de los datos.

Para el estudio contenido en estas páginas, no se recurrirá a media aritmética, ni a frecuencias, ya que los datos recolectados fueron analizados y contrastados con el método jurídico del Test de Proporcionalidad.

3.8. Resultados

En este capítulo presentamos la información principal obtenida del análisis de tres textos legales a la luz del Test de Proporcionalidad:

a) La Ley N° 30717

Sentido del segundo artículo de la ley mencionada, a discusión:

Los sujetos que fueron condenados por cometer cualquier delito doloso, haciéndose especial énfasis en precisas que las personas que cometieron terrorismo o apología, en condición de autoras, mantendrán este obstáculo de postulación inclusive después de haber culminado sus penas. Es decir, no existe rehabilitación para ellas en este aspecto del ejercicio de su derecho de participación.

Principios y/o Derechos en Conflicto:

Principio de Estado Democrático

Principio de idoneidad para el acceso a la función Pública
Principio de Buena Administración

VS.

Derecho a la Participación Política (en su faceta de la facultad de ser elegido)
Derecho a la Resocialización.

Juicio de Idoneidad: El impedimento creado mediante la Ley en cuestión resultaría ser idóneo para la consecución de los principios de Estado Democrático, Idoneidad para acceder a la Función Pública y Buena Administración.

Juicio de Necesidad: Para el caso de estudio, no es posible encontrar medidas

alternativas que permitan maximizarla realización de los principios que se buscan asegurar.

Juicio de Proporcionalidad en estricto: la agresión, limitación o restricción contenida en la Ley 30717 sería calificada como leve, toda vez que busca constituir un filtro o depuración previa de excepcional carácter, que se aplicaría solamente a un reducido número de actos punibles (delitos). Esta normativa no tiene mayor incidencia en las demás expresiones del fundamental derecho de participar en jornadas electorales como candidato, es decir, en su posibilidad de ser elegido. De esta forma, se manifiesta un grado de satisfacción elevado respecto al objetivo planteado al emitir la disposición legal de estudio, el cual es (tomando en cuenta la exposición de motivos) la materialización de los principios precedentemente mencionados, logrando impedir el acceso a puestos de popular elección a aquellos ciudadanos que decepcionaron la confianza de la sociedad al cometer ilícitos penales.

Conclusión:

Los límites expresados en la normativa en cuestión, resultan proporcionales.

Cuando aplicamos el Test de Proporcionalidad a las resoluciones emitidas por los órganos electorales en el caso en concreto, tenemos los siguientes resultados:

b) Resolución N° 065-2018-JEECHYO/JNEE El Hecho y el sentido de la decisión:

El trece del mes de junio del año 2018, el personero de la agrupación política Juntos por el Perú (JP) solicitó que el JEE-CH inscriba la lista de postulación ala Presidencia Regional de su partido, encabezada por el señor Yehude Simon Munaro.

Mediante razón efectuada por el secretario de esta instancia electoral, Abog. Yuri Díaz Jaime, se pone en conocimiento del colegiado que sobre el candidato mencionado existió una sentencia por el ilícito penal de apología terrorista, basándose en información pública circulante en medios informáticos (internet) y precisándose la existencia de una modificatoria a la Ley de Elecciones Reg., respecto a que los ciudadanos condenados por este tipo de delitos no podríanser candidatos para puestos de popular elección, ni aun habiendo cumplido dichas penas o haber sido rehabilitadas. Señalándose, adicionalmente, que el postulante aludido no registro dicho antecedente en su hoja de vida presentada.

Tomando este dato preliminar como criterio para la decisión a tomar, los integrantes del Jurado Elect. Espec. de Chiclayo, en la Res. 65-2018-JEECHYO/JNE dictaminaron a lo largo de los acápites 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, lo siguiente: i) Debía haberse declarado la existencia de la sentencia por el ilícito penal de apología al terrorismo y su posterior indulto, acontecido en el año dosmil; ii) retomó la modificación de la LER descrita en la razón del secretario jurisdiccional, que expresaba la limitación de candidatear a aquellas personas que tuvieran este tipo de condenas, inclusive hayan cumplido íntegramente con ella o fuesen rehabilitadas; iii) Al constituir un requisito insubsanable establecido en las normas electorales vigentes, surte el efecto de declarar no procedente toda la lista propuesta o que esta subsista sin la candidatura única de la persona observada.

Bajo la argumentación expuesta, el colegiado electoral declaro improcedente la postulación del señor Yehude Simon; y por otros motivos sustentados que no son parte de esta investigación, se dio dos días al personero para que proceda a subsanar observaciones contenidas en la relación de candidatos a ocupar consejerías regionales.

Principios y/o Derechos en Conflicto:

Principio de Estado Democrático

Principio de idoneidad para acceder a la pública función

VS.

Derecho a la Dignidad Derecho a la Igualdad

Derecho de la Participación Política (ser elegido)

Juicio de Idoneidad: La aplicación del impedimento creado mediante la Ley N°30717 resulta ser idóneo para la materialización de los principios de Estado Democrático e Idoneidad para el acceso a la Función Pública.

Juicio de Necesidad: Para el presente caso, no era necesaria la aplicación del impedimento cuestionado, toda vez que no existía el supuesto determinado por ley. Debió tenerse presente que don Yehude Simon fue beneficiado por el Indulto Razonado promovido por un grupo especial Ad Hoc para revisión y/o corrección de penas de los sentenciados irregularmente por delitos de terrorismo en mérito al error judicial cometido durante los procesos de juzgamiento.

Conclusión:

La limitación contenida en la resolución cuestionada de primera instancia del Jurado electoral especial de Chiclayo resulta desproporcional.

c) RESOLUCIÓN N° 0446-2018-JNE

El supuesto de hecho y el contenido de la decisión:

Ante la que considero una arbitraria decisión, el Señor Segundo Vásquez como personero legal, presentó el recurso impugnativo de apelación contra la Res. emitida por el JEECH, siendo elevada inmediatamente al Pleno Electoral Nacional. Los argumentos sustentados fueron los siguientes: i) Con una ley especial, un grupo seleccionado bajo criterios de carrera idónea e imparcialidad conforme de manera Ad Hoc una comisión que se entregó a la labor de revisar la condición de cada uno de los sentenciados por delitos relacionados a terrorismo y sus modalidades; ii) Mediante una Res. Sup. emitida por el ministro de Justicia y el Presidente de la Transición Democrática Abog. Valentín

Paniagua, fue concedido un indulto a su representado (Yehude Simon), como una vía rápida de restituirle sus fundamentales derechos puesto que se comprobó que sobre él pesó un error judicial; iii) como parte de su perfil de ejercicio político y ciudadano, se adujo que fue diputado por Lambayeque, representando a pueblo por vías democráticas y bajo el marco de las normas del Estado; iv) en la Sentec. del TC 1277-AC-TC, se reconoció la modalidad de especial indulto o razonado indulto era una manera de reconocer que hubo un error judicial contra algún sujeto; v) no se concedió perdón alguno a favor de Yehude Simon, pues no lo necesitaba ya que jamás cometido el delito que se le imputó; vi) dicho esto, no correspondería aplicar el impedimento contenido en la Ley 30717, ya que no encaja en lo descrito taxativamente en la norma descrita, ya que el beneficio recibido comprobó la inocencia del candidato, y su exclusión de la pugna electoral devendría en irreparables y flagrantes atentados contra sus fundamentales derechos.

Decisión del Tribunal por Mayoría:

- No existió el desarrollo ni ejecución de delito doloso, solo una condena por error

judicial mediante una figura sui generis especial: El Indulto Razonable.

- El apelante ha participado activamente de la vida política del país, con lo cual queda demostrada su idoneidad para el acceso a puestos de elección popular.
- No le es aplicable el supuesto de rehabilitación, toda vez que al no cometer delito alguno, no es posible hablar de que ha sido rehabilitado de alguna pena impuesta.

Fundamentación de la decisión del jurado Raúl Chanamé:

Fundamento de aplicación de Control Difuso: “Si bien de forma abstracta la intención, el objetivo y el sentido de la Ley 30717 resulta legal y constitucional, no se debe descartar que dicha norma, en este supuesto especial dadas las singularidades y contexto notadas, pueda resultar incompatible con los fundamentales derechos concedidos y recogidos en nuestra ley de leyes (Constitución); frente a esta litis o situación conflictiva de la normativa legal y para optar por su inaplicación es propicio proceder a la aplicación del test de proporcionalidad como argumentativa estrategia que servirá para inspeccionary/o analizar limitaciones o intervenciones a derechos fundamentales”

Derechos en conflicto:

Principio de Estado Democrático Vs

Principio de Democracia Participativa Derecho de Participación Política

Juicio de idoneidad desarrollado por el magistrado en minoría: En el supuesto de ciudadanos sobre los que recayó condena por ser autores de ilícitos como terrorismo y sus modalidades (...) esta restricción establecida debe ser

aplicada inclusive a sujetos rehabilitados; este mecanismo de protección al estado democrático se encuentra limitando el derecho de participación (ser elegidos) de los beneficiados con el razonado y especial indulto, tornando a la Ley 30717 en irrealizable al evitar que sea posible postular argumentando como excepción la institución legal del indulto razonado, que es distinta al ordinario indulto concedido a los comunes delincuentes o el humanitario indulto; resultando atentatoria contra los derechos que se involucren de acuerdo con el contexto particular del concreto caso, afirmando entonces que se debe tener presente siempre la defensa y el respeto del derecho político de participación. Se concluye así que el adoptado medio por los legisladores que idearon esta norma en relación a la instituida prohibición, deviene en idóneo para la materialización del objetivo que se persigue, que restringe a sujetos sentenciados o procesados por infracciones penales de terrorismo o modalidades tengan la posibilidad de tentar un cargo público por mandato popular originado en elecciones.

Juicio de necesidad desarrollado por el magistrado en minoría: El operador del derecho no advirtió un mecanismo menos gravoso de connotación excepcional al impedimento al derecho político de participación en elecciones para ser elegido, ya que, una forma opcional debió ser el establecimiento de una acepción para los ciudadanos beneficiados por Ley 26655; esta alcanza a todas las personas con razonado indulto que es el que aplica, no porque fuera decisión de los magistrados tras la existencia de un penal procedimiento de examen, sino por las políticas autoridades, cuando el sujeto o sujetos condenados lo fueron a pesar de ser inocentes o sospechárseles tal condición; por lo que la Ley 30717 considera y expresa cláusulas cerradas relacionadas a la restricción instituida como impedimento para participar en elecciones como postulante y confrontar fundamentales derechos

en un supuesto de hecho concreto, más aún, que de proceder a aplicarse la normativa se imposibilitaría que se haga presente la postulación de una persona con un indulto razonado, dando como resultado que la ley impide totalmente el derecho de participación y a ser elegido para cargo público de representación; razón por la cual se requiere que el supuesto de afectación se resuelva acorde a sus particularidades, atendiendo al hecho de que se encuentra mediando la posibilidad de ser candidato y tener participación en las decisiones de la res pública con incidencia en la vida política del país.

Conclusión desarrollada por el magistrado en minoría:

“La norma citada (Ley 30717) no logra superar el paso correspondiente al examen de necesidad. Para finalizar y enfatizando que, al no haberse superado este examen, no tocaría proceder con el subsiguiente paso, que es el examen de proporcionalidad de forma estricta”.

3.9. Discusión de los resultados y contrastación de la hipótesis

Luego de haber aplicado el Test de proporcionalidad a los tres textos legales de nuestro interés, podemos señalar lo siguiente:

En el primer análisis, el dispositivo legal cuestionado supera el Test de Proporcionalidad, toda vez que se le aplica en el supuesto ideal para el que fue promulgado. A pesar de que existe la colisión entre Principios Constitucionales y Derechos Fundamentales; se deja claro que el Principio de Estado Democrático, el Principio de idoneidad para acceder a los cargos de la función pública y el Principio de Buena Administración – al tener incidencia colectiva y la posibilidad de optimizarse de manera eficaz – se priorizan en pos de la consecución del bienestar general, toda vez

que la población no puede estar expuesta a ser dirigida por personas no idóneas por la comisión de delitos de corrupción o lesa humanidad. En el primer supuesto, porque exponerlos a la función pública nuevamente – cuando tuvieron la oportunidad de ejercer el servicio civil – es permitirles la posibilidad de reiterar su conducta delictiva (al ya conocer los procedimientos de la gestión pública) o perfeccionar métodos para la criminalidad de “cuello blanco”. Y en el segundo supuesto, porque las personas que han cometido crímenes que atentan contra la vida colectiva y el Estado (al no creer en el sistema democrático de gobierno y socavar las estructuras el orden social que permiten la convivencia) con dificultad podrán interiorizar el deber que implica el servicio al Estado, por su propia construcción ideológica (téngase presente que este cuestionamiento es indistinto al tipo de ideología que asuma la persona en cuestión, solo se objeta las acciones que socaven la correcta convivencia social).

Respecto al Derecho de Participación en su vertiente política del Derecho a ser elegido, se observa que este no es intervenido de manera total, ya que cabe la posibilidad de su ejercicio en otras manifestaciones, como a través de referéndum, la participación ciudadana en plataformas de fiscalización, el ejercicio del derecho a voto. Pero queda restringido el ejercicio del personalísimo derecho a ser elegido. Este derecho ha sido tratado mediante el caso *Yatama vs. Nicaragua*, en el cual se expresa que no existe un derecho a ser elegido, sino un derecho a postular igualitariamente en contiendas electorales en pos de garantizar el principio del Estado Democrático en los países miembros de la Convención.

Y finalmente, al tratar el Derecho a la Resocialización, este es un derecho que al igual que otros, es susceptible de ser limitado. Como en el presente Test, este se enmarca en un impedimento de rehabilitación para postular a puestos de representación por sufragio; mas no en otros ámbitos de la vida como la reinserción

para un trabajo, para el desarrollo de actividades sociales, entre otros.

En la aplicación del segundo Test, comienza a mostrarse la verdadera afectación de varios derechos fundamentales, porque en esta oportunidad, se presenta una excepción no contemplada – o no incluida adrede – en la Ley N°30717. En efecto, los beneficiados con el Indulto Razonado en mérito a procesos donde medió error judicial no fueron considerados como segmento poblacional que mereciera protección de sus derechos fundamentales, según criterio del Parlamento y cuyo proceso ha sido ya descrito en apartado 3.2. Sobre la priorización de los Principios de Estado Democrático e Idoneidad para el acceso a la función Pública, si bien se plantearon como de incidencia colectiva y de prioridad en su realización (ya que garantizan la unidad del Estado, la convivencia social y la adecuada prestación de los servicios públicos), es también cierto que si existe una condición especial en este grupo de personas, no se deberá imponer criterios que vulneren derechos fundamentales.

Respecto al Derecho a la Dignidad, se le ha intervenido de manera conexa al derecho de política participación, pues se obvió la dimensión humana del candidato Yehude Simon al no tener en cuenta su construcción psico- emocional al momento de afectar su postulación al Gobierno Regional de Lambayeque.

Sobre el Derecho a la Igualdad, su intervención fue a un nivel intenso – a pesar que en otro espacio podría haber ejercido su condición de igual – ya que es en el ámbito electoral donde, al negársele la oportunidad de postular, se le limita de manera absoluta la posibilidad de candidatear y se le excluye de la contienda con la resolución de primera instancia. Se le somete a una condición de inexcusable desventaja. Para lograr una satisfacción alta de este derecho, se debió aplicar un criterio de igualdad por diferenciación, permitiendo su participación ordinaria en la contienda electoral.

Y, sobre el Derecho a la Participación Política (en su dimensión de ser elegido), fue intervenido de manera media. En este caso, se reitera el criterio utilizado en el primer test practicado a la Ley N° 30717.

El tercer y último test de proporcionalidad (aplicado a la Resolución emitida la máxima instancia electoral del país, el Pleno JNE) es más enriquecedor como detallado. Preliminarmente, se analizan los criterios en mayoría del Pleno:

- “No existió el delito doloso en la persona de Yehude Simon, sino condena derivada de judicial error mediante una figura sui generis especial: El Indulto Razonable”.

Esta figura, como se estudió en el apartado respectivo, fue la manera más inmediata de conseguir la liberación de aquellos que vieron afectado su derecho al debido proceso (ya que este indulto fue otorgado directamente por el presidente de la República. La figura de la amnistía – que tiene otra finalidad y otro mecanismo- no estuvo contemplada como política de Estado). Entonces, el razonamiento de la máxima instancia electoral fue acertadamente considerar “los efectos de la aplicación de esta figura excepcional” antes que su existencia vigente en nuestro ordenamiento. A partir de aquí, asumió como inexistentes las imputaciones por el delito de terrorismo contra el candidato Yehude Simon.

- “El apelante ha participado activamente de la vida política del país, con lo cual queda demostrada su idoneidad para el acceso a puestos de elección popular”.

El haber ejercido como Presidente Regional de Lambayeque en dos ocasiones, creó en el colegiado del Pleno J.N.E. la convicción de que no solo no había cometido los actos por los cuales fue condenado erróneamente a fines de los años noventa, sino

que incluso le dotaba de una imagen de político gestor en el sector público.

- “No le es aplicable el supuesto de rehabilitación, toda vez que al no cometer delito alguno, no es posible hablar de que ha sido rehabilitado de alguna pena impuesta”.

No se creyó conveniente referirse al tema de la rehabilitación, pues al asumir la postura de la comisión de delitos dolosos como el de actos de terrorismo, es imposible hablar de estar impedido de participar en elecciones incluso después de rehabilitado.

Cabe recordar que si bien esta resolución del Pleno no pasó desapercibida y expresó algunos criterios para la permisión de la postulación de personas beneficiadas por el Indulto Razonado.

El voto singular del Magistrado Raúl Chanamé Orbe dio otras luces sobre la posible resolución de esta arbitrariedad cometida ante la presencia de un vacío legal.

En lo referido a la inaplicación de una norma que contraviene la Constitución por Control Difuso, nunca antes el colegiado del Pleno J.N.E. ha recurrido a esa figura (no obstante la posibilidad de hacerlo, en razón de su función práctica como jueces en materia electoral). Sin embargo, yendo más allá, el magistrado menciona la posibilidad de inaplicar la Ley N° 30717 en razón del Control de Convencionalidad, por considerar que trasgredía lo normado en el veintitresavo artículo de la Conv. Amer. de DD.HH., que refiere que: Cualquier persona disfruta y goza de estas oportunidades y facultades: a) participar dirigiendo las cuestiones de naturaleza pública, sin intermediarios o por representantes seleccionados mediante procesos electorarios veraces; b) sufragar y ser electos en elecciones genuinas cada cierto tiempo, efectuadas por voto universal e igualitario y protegido por el secreto, que asegure la imparcial expresión de la voluntad de los ciudadanos, y c) acceder a las representaciones y labores funcionales

públicas de su país”.

Y sobre el test de proporcionalidad aplicado a esta Resolución del Pleno, se confrontó solamente dos derechos: Principio de Estado Democrático vs. Principio de Democracia Participativa y Derecho político de participación.

En el juicio de idoneidad, se supera la etapa ya que la medida es conducente para lograr la protección del Principio de Estado Democrático, al aplicar rigidez en los requisitos para la postulación a cargos de representación popular. Sin embargo, ya aplicando el sub paso del juicio de necesidad se interviene de manera intensa el Derecho a la participación Política porque anula toda posibilidad de ejercer el derecho a ser elegido. Por otra parte, se pudieron prever medidas alternativas para no intervenir el derecho del candidato, por ejemplo, permitir la candidatura respaldados en los criterios generales establecidos en la fundamentación mayoritaria.

Conclusiones

- 1- Las limitaciones o condiciones para ser postulante a cargos obtenidos mediante elecciones añadidos en la legislación electoral a través de la Ley N° 30717 – en específico, la prohibición para aquellos que fueron sentenciados por delitos de terrorismo – al no señalar la excepción de aplicación para aquellos condenados por error judicial e indultados por intervención de la “Comisión Lanssiers” afectan el Derecho a la Dignidad (al violar de manera consiente los valores de participación democrática asumidos por el postulante y sus expectativas de realización política) , el Derecho a la Igualdad (por ser impedido tentar una postulación en base a un estigma social antes que por criterios técnico jurídicos, lo cual se manifestó en su desigual condición para postular por la demora que existió para tomar una decisión sobre la viabilidad de su candidatura) y el Derecho a la Participación Política, en su manifestación del Derecho a ser elegido para el ejercicio de cargos públicos.

- 2- De manera complementaria, se ha logrado determinar que este supuesto en específico se cometió un acto de arbitrariedad al no tener presente el Principio de Razonabilidad para la aplicación de la Ley N° 30717 y sus impedimentos; ya que se realizó una interpretación literal de la norma que obvió antecedentes jurídicos sobre el tratamiento de aquellos beneficiados por el Indulto Razonado durante los últimos años del Gobierno de Alberto Fujimori y los primeros años de la transición democrática.

- 3- Una vez analizados los impedimentos regulados por la Ley N° 30717 para ocupar cargos de representación, se observa una vulneración al principio de rehabilitación y resocialización– aunque la afectación de este principio no haya sido eje central de este estudio – al incluir que el impedimento de postulación subsistirá incluso cuando se haya rehabilitado a las personas que incurren en los descritos en la norma sujeta al

presente estudio.

- 4- De otro lado, el estudio y aplicación de los impedimentos establecidos en la norma cuestionada apertura la posibilidad a los integrantes del Pleno del J.N.E. para proceder a la aplicación del Control Difuso y Control de Convencionalidad

(al asumir, en concreto, las labores de jueces en materia electoral). Aunque estavez no se suscitó esta oportunidad – ya que el uso del Test de Proporcionalidad que permitiría proceder con el Control difuso fue solamente el fundamento del Dr. Raúl Chanamé Orbe – esta hubiera sido la primera vez que se asumía este criterio para inaplicar una normativa por contravenir la Constitución Política del Estado.
- 5- Si bien la Sentencia del T.C. contenida en el P. JURISDIC. de los Expedientes 15-2018-PI.TC y 24-2018-PI.TC respalda la posición de este estudio bajo otros argumentos al declarar la inconstitucionalidad de la terminología "no obstante estas hayan sido rehabilitadas" del segundo, tercero y 4 artículo de la Ley 30717 argumentando la trasgresión del Derecho de Participación en la extensión de la posibilidad de ser elegido cuando ya han sido restituidos los derechos civ. y pol. en mérito al principio de Rehabilitación, consideramos que es un pronunciamiento incompleto, ya que no da tratamiento a la exceptuación de los rehabilitados por el Indulto Razonado en razón del error judicial en los casos de terrorismo.
- 6- Nuestro estudio tiene plena vigencia en sus argumentos y su sentido de protección del fundamental derecho de la política participación de este segmento poblacional afectado en tanto concluye que - para el efectivo ejercicio de este derecho fundamental en su extensión del Derecho a ser elegido - la norma debe aplicar el criterio jurídico constitucional de igualdad por diferenciación al grupo de indultados razonablemente, que permitiría exceptuarlos de la aplicación del impedimento por sentencia por

terrorismo, aun cuando hayan sido rehabilitados.

- 7- En definitiva, para garantizar respeto del derecho a la participación política de aquellas personas que fueron beneficiadas con el Indulto Razonado, es necesario incluir en la LOE, LER y la LEM la consignación del indulto razonado como excepción de aplicación de los impedimentos para poder inscribir postulaciones a cargos de representación por sufragio popular en el caso de sentenciados por terrorismo por error judicial.

Recomendaciones

1. Se recomienda tener presente la propuesta de modificatoria legislativa planteada en esta investigación, como una manera de dar mayores garantías para el ejercicio del derecho a la participación política, disminuyendo la posibilidad de cometer arbitrariedades en base a imprecisiones de naturaleza formal.
2. Impulsar un debate jurídico sobre el marco legal desarrollado durante el periodo de violencia política suscitado en el país, a fin de estudiar y analizar las consecuencias que trae consigo el uso y abuso del Derecho en circunstancias de inestabilidad democrática.

PROPUESTA LEGAL

“LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES, LEY DE ELECCIONES REGIONALES Y LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS BENEFICIARIOS CON INDULTO RAZONADO PROMOVIDO POR EL GRUPO DE LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LEY N° 26655”

Artículo 1. Incorpórese un párrafo al literal i) del artículo 107 y de un apartado más al primer párrafo del artículo 113 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, conforme al texto siguiente:

“Artículo 107. No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República:[...] i. (...) No es aplicable el impedimento por sentencia por delitos de terrorismo, aun cuando hubieran sido rehabilitados, para aquellos beneficiados por el Indulto Razonado en mérito a error judicial promovido por la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 26655.

Artículo 113. No pueden ser candidatos a representantes al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino, salvo que renuncien seis (6) meses antes de la fecha de las elecciones: [...]

No es aplicable el impedimento por sentencia por delitos de terrorismo, aun cuando hubieran sido rehabilitados, para aquellos beneficiados por el Indulto Razonado en mérito a error judicial promovido por la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 26655.

Artículo 2. Incorpórese un párrafo al literal f) del numeral 5 del artículo 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, conforme al texto normativo siguiente:

“Artículo 14. Impedimentos para postular

No pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos regionales los siguientes ciudadanos: [...] 5. También están impedidos de ser candidatos: [...] f) (...) No es aplicable el impedimento por sentencia por delitos de terrorismo, aun cuando hubieran sido rehabilitados, para aquellos beneficiados por el Indulto Razonado en mérito a error judicial promovido por la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 26655.

Artículo 3. Incorpórese un párrafo al literal g) del párrafo 8.1 del artículo 8 de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, conforme al texto normativo siguiente:

“Artículo 8. Impedimentos para postular. No pueden ser candidatos en las elecciones municipales: 8.1 Los siguientes ciudadanos: [...] g) (...) No es aplicable el impedimento por sentencia por delitos de terrorismo, aun cuando hubieran sido rehabilitados, para aquellos beneficiados por el Indulto Razonado en mérito a error judicial promovido por la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 26655.

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a lo... días del mes de....de dos mil.....

Referencias Bibliográficas

❖ Libros

1. Alcántara, J. R. (2015). El Derecho Constitucional Y Procesal Constitucional en sus conceptos claves. Un enfoque doctrinario y jurisprudencial. Lima:Gaceta Jurídica S.A.
2. Arroyo, C. L. (2018). Los Derechos Fundamentales. Lima: PUCP.
3. Atienza, M. (2006). Las razones del derecho Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Lima.
4. Badeni, G. (2006). Tratado De Derecho Constitucional. Buenos Aires: LA LEY.
5. Ballesteros, E. B. (1996). La Constitución de 1993- Análisis comparado. Lima: EDITORA RAO S.R.L.
6. Blancas, C. (2016). Derecho Electoral Peruano. Lima, Perú: Palestra Editores.
7. Bobbio, N. (1991). El tiempo de los Derechos. Madrid: Editorial Sistema.
8. Bobbio, N. (2001). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
9. Borea, A. (1994). Los elementos del Estado Moderno. Lima, Perú: Editorial Hochman International S.A.
10. Borea, A. (2016). Manual de la Constitución. Para que sirve y como defenderte.Lima, Perú: Editorial El Búho.
11. Cabanellas, G. (2002). Diccionario Jurídico Elemental. (13ª edición). Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta.

12. Cama, C. C. (2010). La dignidad de la persona humana en el ordenamiento jurídico constitucional peruano. En Los Derechos Fundamentales. Estudios de los derechos constitucionales desde las diversas especialidades del Derecho (p. 25). Lima: Gaceta Jurídica S.A.

13. Camacho, W. G., & Sosa Sacio, J. (2005). Igualdad ante la ley. La Constitución comentada. Lima: Gaceta Jurídica S.A.

14. Carpio, M. V. (2013). La Participación Ciudadana en el Perú y los Principales Mecanismos para Ejercerla. Obtenido de Informe Especial:

[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/10CB865461FC9E2605257CEB00026E67/\\$FILE/revges_1736.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/10CB865461FC9E2605257CEB00026E67/$FILE/revges_1736.pdf)

15. Carrera, J. B. (2008). Aproximaciones al contenido esencial del derecho de participación política. En PUPC, Pensamiento Constitucional. Lima: Fondo editorial PUCP.

16. Carrillo, J. (1995). Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo, Madrid, España: Editorial Tecnos.

17. Castro, P. G. (2010). El derecho a la motivación de las sentencias y el control constitucional de la actividad judicial. El debido proceso. Estudio Sobre Derechos y garantías procesales. Lima: Gaceta Jurídica S.A.

18. Chanamé, R. (2009). Comentarios a la Constitución. (4° edición). Lima, Perú: Jurista Editores.

19. Clavero, B. (2016). Sujeto de Derecho entre Estado, Género y Cultura. Santiago,

Chile: Ediciones Olejnik.

20. Comblin, J. (1977). *Le pouvoirmilitaire en Ameriquelatine: l'ideologie de la securite nationale*. París, Francia: J.-P. Delarge.
21. Córdova, L. C. (2006). *Comentarios al Código Procesal Constitucional*. Lima: PALESTRA EDITORES S.A.C.
22. Correa, M. R. (1999). *Estudio de la Constitución Política del Perú de 1993*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
23. Cresci, G. (2015). *Resoluciones no revisables por el Poder Judicial*. En: Gutiérrez, W. (Coordinador). *La Constitución Comentada. Tomo IV. (3° edición)*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
24. Cruz, G. E. (2013). *Constitución y Procesos Constitucionales*. Lima: Adrus D&L Editores S.A.C.
25. Dahl, R. A. (1992). *La democracia y sus críticos*. España: Ediciones Paidós Ibérica.
26. Díaz, F. (2009). *Valores Superiores e Interpretación Constitucional*. Chihuahua, México: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
27. Donayre, Ch. (2014). *Amparo electoral*. En: Tupayachi, J. (Compilador) *Precedente Constitucional Vinculante en el Perú. (2° edición)*. Lima, Perú: Adrus D&L Editores.
28. Ferrero, R. (1981). *Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional*. Lima, Perú: Editorial Universo.
29. Gonzales, J. (1986). *La Dignidad de la Persona*. Madrid, España: Editorial Civitas.

30. Guasitini, R. (2001). Estudios De Teoría Constitucional. México: Distribuciones Fontamara, S.A.
31. Haberle, P. (2003). El Estado constitucional. (2º edición). Lima, Perú: Fondo editorial UNAM – PUCP.
32. Humanos, C. I. (2000). Informe N°49/00- Caso 11.182. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
33. Humanos, C. I. (2013). CASO J. VS. PERÚ. SENTENCIA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. Washington, D.C.: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
34. Internacional Idea, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg y otros (2007). Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. (2º edición). Distrito Federal, México: Fondo de Cultura Económica.
35. KANT, Emmanuel, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en Mardomingo, J. (Trad.). Barcelona, España: Ariel.
36. Kelsen, H. (2008). Esencia y valor de la democracia. España: Ediciones Labor.
37. Landa, C. (2006). Dignidad de la persona humana, en Id., Constitución y fuentes del Derecho. Lima, Perú: Palestra.
38. Laporta, F. (2000). Diccionario Crítico de los Derechos Humanos I. Huelva, España: Fondo Editorial de la Universidad Internacional de Andalucía.
39. Linares, J. F. (1989). Razonabilidad de las leyes: la garantía del debido proceso como garantía innominada en la constitución argentina. Buenos Aires: Astrea.

40. Mesía, C. (2018). Los Derechos Fundamentales. Dogmática y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. (1° edición). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

41. Miranda, E. Á., & Canales Cama, C. (s.f.). Congreso. Obtenido de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C7218075B5A3040905257CAD007E0676/\\$FILE/representacion_politica.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C7218075B5A3040905257CAD007E0676/$FILE/representacion_politica.pdf)

42. Nieto, C. H. (2012). Curso de Derecho Constitucional. Lima: Palestra Editores S.A.C.

43. Nogueira, H. (2009). La Interpretación Constitucional de los Derechos Humanos. Lima, Perú: Ediciones Legales.

44. Nohle, D. (2007). La Justicia Electoral y sus desafíos en América Latina. En: Oficina Nacional de Procesos Electorales, Organización de Estados Iberoamericanos. Elecciones y democracia: la experiencia latinoamericana. Lima, Perú: Fondo Editorial ONPE.

45. Orbe, R. C. (2017). La Constitución de todos los peruanos. Lima: Fondo Editorial Cultura Peruana E.I.R.L.

46. Panillos, R. A. (2008). Guía exegético y práctico del CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Lima: Editorial San Marcos E. I. R. L.

47. Peces – Barba (1984). La Dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho. Madrid, España: Editorial Tecnos.

48. Peralta, W. A. (1992). Comisión Ad-Hoc: Antecedentes, Funciones y Perspectivas. Derecho y Sociedad, 43.

49. Pina, R. E. (1973). Cláusulas constitucionales programáticas. Buenos Aires: Astrea.

50. Pulido, C. B. (2005). El Derecho de los derechos. Bogotá: Universidad del Externado.
51. Reconciliación, C. d. (2003). Informe Final. Lima: Comisión de la verdad y reconciliación.
52. República, L. (14 de Octubre de 2008). La República. Obtenido de La República: [https://larepublica.pe/politica/374012-hubo-rigurosa-investigacion- para-indultar-a-yehude-simon/](https://larepublica.pe/politica/374012-hubo-rigurosa-investigacion-para-indultar-a-yehude-simon/)
53. Ríos, G. (2017). ¡Hagamos Juntos tu Tesis de Derecho! Lima, Perú: Ideas Solución Editorial.
54. Rodríguez, E. X. (11 de Mayo de 2018). IUS 360. Obtenido de IUS 360: <http://ius360.com/notas/como-hacer-un-test-de-proporcionalidad-alexiano-y-no-morir-en-el-intento-una-critica-proposito-de-la-resolucion-de-incautacion-de-bienes-emitida-por-el-juez-carhuancho/>
55. Rubiños, L. P. (2014). EL HÁBEAS CORPUS CONTRA ACTOS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Lima: Gaceta Jurídica S.A.
56. Sagués, N. P. (2008). Derecho Procesal Constitucional. Logros Y Obstáculos.Lima: Centro De Estudios Constitucionales.
57. Sessarego, C. F. (2005). De la Persona y de la sociedad. Derechos fundamentales de la Persona. La Constitución comentada. Lima: Gaceta Jurídica S.A.
58. Taruffo, M. (2003). Ideas para una teoría de la decisión justa”. En: Cinco lecciones mexicanas. México: Tribunal Electoral.
59. Villa, A. (2010). Control difuso administrativo. Derecho Administrativo. Lima:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

60. Zegarra, W. A. (2010). COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Lima: EDICIONES LEGALES E.I.R.L.

Revistas

61. Albán, W. (1997). Comisión Ad-Hoc: Antecedentes, Funciones y Perspectivas. En: Derecho & Sociedad. Número 12. Lima, Perú: PUCP.
62. Alexy, R. (2009). Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 11.
63. Añon, J. (2002). Derechos Fundamentales y Estado Constitucional. En: Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique FurióCeriol. Número 40. Valencia, España: Fondo editorial de la Universidad de Valencia.
64. Bernalles, E. (2006). El derecho humano a la Participación Política. En DerechoPUCP. Revista de la Facultad de Derecho. Número 59. Lima, Perú. Fondo Editorial PUCP.
65. Boyer, J. (2012). Aproximaciones al contenido esencial del Derecho de Participación Política. En: Pensamiento Constitucional. Año XIII, Número 13. Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP.
66. Campos, G. B. (1991). Libertad de participación política en el marco de los derechos humanos. BIDART CAMPOS, Germán. Ubertad de participación política en el marco de los derechos humanos. En: "Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos", párrafo 5.

67. Córdova, L. C. (2005). El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. . Revista Peruana de Derecho Público, 127-151.
68. Donayre, Ch. Entre la autonomía y la autarquía del Jurado Nacional de Elecciones: la irrevisibilidad de sus decisiones en sede jurisdiccional en cuestión. En: Derecho PUCP. Revista de la Facultad de Derecho. Número 59. Lima, Perú. Fondo Editorial PUCP.
69. Landa, C. (2007). El Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. En: Elecciones. Número 7. Lima, Perú: Oficina Nacional de Procesos Electorales.
70. Letona, Ú. (2018). El proceso de la reforma electoral: el balance de la primera etapa. En: Vox Iuris: Revista de la Facultad de Derecho. Volumen 35. Número Lima, Perú: Fondo Editorial USMP.
71. Prevost, Ú. I. (2008). ¿RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD O AMBOS? UNA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE SUS CONTENIDOS A PARTIR DEL CONCEPTO DE PONDERACIÓN. THEMIS-Revista de Derecho.

Páginas Web

72. Landa, C. (2010). *El Control Constitucional de las Resoluciones electorales en el Perú*. Ponencia del Congreso Iberoamericano de Derecho electoral. Recuperado en: <http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/congreibero/ponencias/cesarlanda.pdf>

73. De Belaúnde, A. (2018). *No condenemos nuevamente a los inocentes*. Recuperado de:
<https://medium.com/@AlbertoBelaunde/no-condenemos-nuevamente-a-los-inocentes-4f804f0c869a>
74. Páez, A. (2017). *Alberto Fujimori es el que excarceló a más presos por terrorismo*: 535. La República. Recuperado de:<https://larepublica.pe/politica/1099424-fujimori-es-el-que-excarcelo-a-mas-presos-por-terrorismo-535>
75. Vega, Y. (19 de junio de 2018). *Simon: “JEECH no respeto la ley y es poco profesional”*. La República. Recuperado de:
<https://larepublica.pe/politica/1263249-simon-jeech-respeto-ley-profesional>
76. Vega, Y. (21 de junio de 2018). *Simon con respaldo de la Defensoría*. La República. Recuperado de: <https://larepublica.pe/sociedad/1264457-simon-respaldo-defensoria>

Tesis

77. García, J. (2006). *El control jurisdiccional del Indulto Particular*. (Tesis de Doctorado). Gran Canaria: Universidad Las Palmas de Gran Canaria.
78. Vargas, A. (2017). *La inaplicación del Control Difuso de Convencionalidad por parte del JNE y los Derechos Políticos de los candidatos a cargos públicos*. (Tesis de Licenciatura). Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.
79. Chirinos y Salazar (2008). *Cuestionamiento Judicial de las Resoluciones del JNE frente al Derecho de Acceso a la Justicia como manifestación del Derecho al Debido Proceso*. (Tesis de Licenciatura). Pimentel: Universidad Señor de Sipán.

Jurisprudencia

Exp. N° 1277-99-AC/TC (Caso Ana Elena Townsend Diez Canseco y otros). Resolución N° 0446-2018-JNE (Caso Yehude Simon)

Informes y Dictámenes

80. Proyecto de Ley N° 616/2016 – CR (Que prohíbe que personas sentenciadas por terrorismo postulen a cargos de elección popular). Recuperado de:
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0061620161111.pdf
81. Oficio N° 302-2017-PR (Observación realizada por el Poder ejecutivo a la Autógrafa de la Ley N° 30717). Recuperado de:
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Observacion_a_la_Autografa/OBAU0061620171128.pdf
82. Dictamen de la Comisión de Constitución y Derechos Humanos. (Allanamiento a la observación realizada por el Poder ejecutivo). Recuperado de:
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00616DC04MAY20171205.pdf
83. Defensoría del Pueblo. (2009). *Detenciones arbitrarias y responsabilidad del Estado. Estudio de casos*. Recuperado de: <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-010-2009-DP-ADHPD.pdf>
84. Minjus (2014). *Lineamientos Generales del Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos*. Recuperado en: <https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/LineamientosPRDC.pdf>

- Opinión Consultiva 'El Efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts.47 y75)', 1982.

Legislación

- Convención Americana de Derechos Humanos
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Constitución Política del Perú
- Ley N° 26655 – Comisión encargada de proponer al Presidente de la República la concesión de indulto a personas condenadas por delitos de terrorismo o traición a la patria.
- Ley de Elecciones Regionales
- Ley N° 30717 – Modificatoria de la LOE, LER y LEM.

ANEXO

MATRIZ DE CONSISTENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS :

PROGRAMA ACADEMICO: MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

TITULO DE INVESTIGACIÓN: “LA VULNERACION DEL DERECHO DE PARTICIPACION POLITICA DE LOS BENEFICIADOS CON EL INDULTO RAZONADO ATRAVES DE LOS IMPEDIMENTOS DE POSTULACION A CARGOS DE ELECCION POPULAR: CASO YEHUDE SIMON”

	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	TIPO DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN	TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS	MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS
¿Qué factores impiden o afectan el adecuado ejercicio del derecho a la participación política de los beneficiados con el indulto razonado por error judicial?	<p>GENERAL: DEMOSTRAR que los impedimentos para postular a cargos de elección popular añadidos en la legislación electoral – a través de la Ley N° 30717 - incurrir en deficiencias que atentan contra el derecho a la participación política de los favorecidos con el indulto razonado.</p> <p>ESPECIFICOS: ANALIZAR la regulación de los impedimentos para postulación a cargos</p>	<p>Se vulnera el derecho a la participación política en la medida que los impedimentos para postular a cargos de elección popular añadidos a la legislación electoral – a través de la Ley N° 30717 – no contemplan como excepción de aplicación a los beneficiados con el indulto razonado en mérito al error judicial.</p>	<p>INDEPENDIENTE Impedimentos para postular a cargos de elección popular añadidos en la legislación electoral a través de la ley N° 30717</p> <p>DEPENDIENTE Vulneración al derecho a la participación política</p>	<p>- Por Tipo: Básica y Analítica</p> <p>- Por Nivel: Descriptiva y Explicativa</p> <p>- Por enfoque: Cualitativa</p>	<p>- 893 indultados por la intervención de la Comisión Lanssiers, que integran el grupo de personas beneficiadas con la figura del Indulto Razonado que ven amenazado el ejercicio de su derecho a la participación política al ser impedidas de postular a cargos de elección popular en aplicación de</p>	Análisis documental	Analítico Inductivo

	<p>de elección popular establecidos en la legislación electoral a través de la Ley N° 30717.</p> <p>DESCRIBIR la forma en que se ve vulnerado el derecho de participación política de los favorecidos con el indulto razonado a raíz de las modificaciones establecidas por la Ley N° 30717.</p> <p>PROPONER la consignación del indulto razonado como excepción de aplicación de los impedimentos para postular a cargos de elección popular y de medios idóneos que permitan la protección del derecho a la participación política de los candidatos a cargos de elección popular.</p>				la Ley N° 30717, durante las elecciones Regionales y Municipales 2018.		
					<p>MUESTRA Expediente N° ERM.2018009978 (Caso Yehude Simon) - Resolución N° 0446-2018-JNE</p>	<p>INSTRUMENTOS S Ficha</p>	

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, **Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo**, Docente¹/Asesor de tesis²/Revisor del trabajo de investigación³, del (los) estudiante(s),

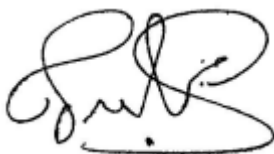
- Bach. Juan Carlos Barturen Fernandez

Titulada: **“La vulneración del derecho de participación política de los beneficiados con el indulto razonado a través de los impedimentos de postulación a cargos de elección popular: caso Yehude Simon”.**

LAMBAYEQUE 2022, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de **20%** verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 05 de octubre de 2022.



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

Se adjunta:

- Resumen del Reporte (Con porcentaje y parámetros de configuración)
- Recibo digital.

LA VULNERACION DEL DERECHO DE PARTICIPACION POLITICA DE LOS BENEFICIADOS CON EL INDULTO RAZONADO ATRAVES DE LOS IMPEDIMENTOS DE POSTULACION A CARGOS DE ELECCION POPULAR: CASO YEHUDE SIMON

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%

INDICE DE SIMILITUD

20%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

2%

2

dspace.unitru.edu.pe

Fuente de Internet

2%

3

idoc.pub

Fuente de Internet

1%

4

busquedas.elperuano.pe

Fuente de Internet

1%

5

repositorio.pucp.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

tc.gob.pe

Fuente de Internet

1%

7

Submitted to Pontificia Universidad Catolica
del Peru

Trabajo del estudiante

1%

repositorio.ucv.edu.pe



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

8	Fuente de Internet	1 %
9	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante	1 %
10	actualidadlegal.institutopacifico.com.pe Fuente de Internet	<1 %
11	www.ipde.org.pe Fuente de Internet	<1 %
12	Submitted to Universidad San Ignacio de Loyola Trabajo del estudiante	<1 %
13	www.usip.org Fuente de Internet	<1 %
14	ley.exam-10.com Fuente de Internet	<1 %
15	qdoc.tips Fuente de Internet	<1 %
16	www.kas.de Fuente de Internet	<1 %
17	www.revistas.pucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
18	doku.pub Fuente de Internet	<1 %



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

19	nilavigil.files.wordpress.com Fuente de Internet	<1 %
20	www.web.onpe.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
21	gacetaconstitucional.com.pe Fuente de Internet	<1 %
22	www.cajpe.org.pe Fuente de Internet	<1 %
23	repositorio.udch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
24	repositorio.upagu.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
25	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
26	derecho.usmp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	www.cgconstitucional.com Fuente de Internet	<1 %
28	dl.dropboxusercontent.com Fuente de Internet	<1 %
29	repositorio.upt.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
30	zonasegura.seace.gob.pe Fuente de Internet	<1 %



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

31	www.cnddhh.org.pe Fuente de Internet	<1 %
32	documents.mx Fuente de Internet	<1 %
33	cybertesis.unmsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
34	repositorio.unsa.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
35	www.monografias.com Fuente de Internet	<1 %
36	repositorio.undac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
37	www.onpe.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
38	vsip.info Fuente de Internet	<1 %
39	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
40	repositorio.utelesup.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
41	www.ruv.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
42	dokumen.pub Fuente de Internet	<1 %



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

43	vbook.pub Fuente de Internet	<1 %
44	derechoshumanos.gob.mx Fuente de Internet	<1 %
45	Submitted to Universidad de San Martín de Porres Trabajo del estudiante	<1 %
46	abogazago.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
47	www.nodiscriminalgbt.com Fuente de Internet	<1 %
48	dochero.tips Fuente de Internet	<1 %
49	bvk.bnp.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
50	www.pj.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
51	es.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
52	es.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
53	issuu.com Fuente de Internet	<1 %
54	www.elperulegal.com	



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

	Fuente de Internet	<1 %
55	repositorio.unh.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
56	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 36 (2020) (VOLUME II)", Brill, 2022 Publicación	<1 %
57	tesis.ucsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
58	1library.co Fuente de Internet	<1 %
59	repositorio.unap.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
60	cronica.diputados.gob.mx Fuente de Internet	<1 %
61	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
62	tesis.pucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
63	www.idl.org.pe Fuente de Internet	<1 %
64	canaln.pe Fuente de Internet	<1 %



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

65	ius360.com Fuente de Internet	<1 %
66	pirhua.udep.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
67	theibfr.com Fuente de Internet	<1 %
68	repositorio.unjfsc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
69	www.globovision.com.ve Fuente de Internet	<1 %
70	www.ombudsman.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
71	www.op.org Fuente de Internet	<1 %
72	www.racsa.co.cr Fuente de Internet	<1 %
73	pt.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
74	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
75	repositorio.unheval.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
76	Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote	<1 %



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

Trabajo del estudiante

77	dataglobe.org Fuente de Internet	<1 %
78	lpderecho.pe Fuente de Internet	<1 %
79	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
80	repositorio.unsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
81	resources.aprendoencasa.pe Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 15 words

Excluir bibliografía

Activo



Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor

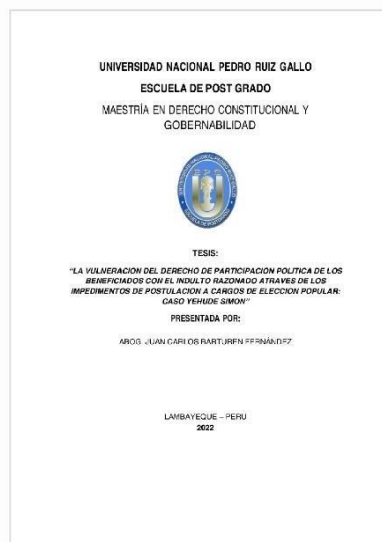


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Juan Carlos Barturen Fernandez
Título del ejercicio: Tesis Posgrado
Título de la entrega: LA VULNERACION DEL DERECHO DE PARTICIPACION POLITIC...
Nombre del archivo: Juan_Barturen_Fernandez._Tesis.docx
Tamaño del archivo: 473.5K
Total páginas: 101
Total de palabras: 27,093
Total de caracteres: 147,890
Fecha de entrega: 27-jul.-2022 10:10a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 1875840107



Derechos de autor 2022 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo
Asesor